



REPÚBLICA ARGENTINA
VERSION TAQUIGRÁFICA

(PROVISIONAL)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

12º Reunión - 10ª Sesión ordinaria - 6 de agosto de 2008

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, D. **Julio César Cleto Cobos**,
de la señora vicepresidenta 2º del H. Senado, senadora **Liliana Teresita Negre de Alonso** y
del señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador **Carlos**

Alberto Reutemann

Secretarios: señor D. **Juan Héctor Estrada** y señor D. **Jorge Luis Alberto Tieppo**

Prosecretarios: señor D. **Juan J. Canals**, señor D. **Mario Daniele** y

señor D. **Gustavo Carlos Vález**

PRESENTES

BASUALDO, Roberto Gustavo
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana Raquel
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
CASTILLO, Oscar Anibal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María Teresita Del Valle
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes
DÍAZ, María Rosa
ESCUADERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FILMUS, Daniel Fernando
FORSTMANN, Selva Judith
FUENTES, Marcelo Jorge
GALLEGO, Silvia Ester
GIOJA, César Ambrosio
GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio
MARÍN, Rubén Hugo
MARINO, Juan Carlos
MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
MARTÍNEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto
MAZA, Ada Mercedes
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Rubén
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
OSUNA, Blanca Inés
PARRILLI, Nanci María Agustina
PERCEVAL, María Cristina
PÉREZ ALSINA, Juan Agustín
PÉRSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Ángel
PINCHETTI de SIERRA MORALES, Delia Norma
QUINTELA, Teresita Nicolasa
RACHED, Emilio Alberto
REUTEMANN, Carlos Alberto
RÍOFRÍO, Marina Raquel
RÍOS, Roberto Fabián
RODRÍGUEZ SA A, Adolfo
ROSSI, Carlos Alberto
SAADI, Ramón Eduardo

SALAZAR, Carlos Eduardo
SÁNCHEZ, María Dora
SANZ, Ernesto Ricardo
TORRES, Eduardo Enrique
TROADELLO, Mónica
URQUÍA, Roberto Daniel
VERA, Arturo
VERANI, Pablo
VIANA, Luis Alberto
VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTES CON AVISO

BIANCALANI, Fabio Darío
CABANCHIK, Samuel Manuel
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda Beatriz
MAYANS, José Miguel Ángel
MENEM, Carlos Saúl
NIKISCH, Roy Abelardo
PAMPURO, José Juan Bautista
ROMERO, Juan Carlos

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional
2. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos
3. Plan de labor parlamentaria
4. Asuntos entrados (continuación)
5. P.E.-97/08: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala II
6. P.E. -102/08: Promoción al grado inmediato superior de personal militar de la fuerza Ejército
7. Rechazo a directiva del Parlamento de la Unión Europa sobre inmigración
8. Consideración en conjunto de órdenes del día
 - OD-314: Beneplácito por la realización de las III Jornadas Institucionales de Educación, Constructivismo y Aprendizaje Significativo en la Escuela, Inclusión con calidad, responsabilidad y compromiso , en Villa Paranacito, Entre Ríos
 - OD-315: Declaración de interés turístico cultural del Vía Crucis Submarino
 - OD-316: Preocupación por el alto índice de desocupación en la provincia de Catamarca.
 - OD-317: Adopción de medidas para la continuidad del Programa de Empleo Transitorio (PET) en Palpalá, Jujuy
 - OD-318: Medidas adoptadas para eliminar los talleres clandestinos de confección de ropa. Pedido de informes
 - OD-319: Grado de formalidad que registran las personas que trabajan en el servicio doméstico. Pedido de informes
 - OD-320: Cantidad de personas que pasaron al régimen de reparto faltando 10 años para su jubilación. Pedido de informes
 - OD-321: Inclusión de la actividad textil dentro de los regímenes especiales, según el artículo 15 de la ley 24.241 y su modificatoria 26.222 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones)
 - OD-323: Prórroga de la vigencia del Plan Jefes y Jefas de Hogar
 - OD-324: Coordinación del control con el gobierno de la provincia de La Rioja sobre los trabajadores migrantes (golondrinas)
 - OD-325: Pensiones asistenciales. Pedido de informes
 - OD-326: Adecuación de los montos de las asignaciones familiares e inclusión de la región del NEA como zona diferencial
 - OD-327: Adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 - OD-328: Declaración de interés del Honorable Senado de la V Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 - OD-329: Beneplácito por la instrumentación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de un régimen simplificado para la liquidación del impuesto a los bienes personales para los empleados en relación de dependencia
 - OD-330: Beneplácito por la conmemoración del 32º aniversario de la sanción de la ley 19.587/72, que instituyó el Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo
 - OD-331: Adhesión al Día Mundial del Teatro
 - OD-332: Adhesión al Día del Ingeniero Agrónomo
 - OD-333: Beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela de Educación Técnica N° 1, General Savio, Palpalá, Jujuy, celebrado el 1º de abril de 2008.
 - OD-335: Declaración de interés del XVI Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas. VIII Internacional y IX del Mercosur, Río Cuarto
 - OD-336: Adhesión al 192º aniversario de la Declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816
 - OD-337: Declaración de interés cultural de la trayectoria artística de Roberto Galarza, cantor y compositor del nordeste argentino

- OD-347: Adhesión al aniversario del descubrimiento del canal Beagle, a conmemorarse el 14 de abril
- OD-348: Beneplácito por el 89° aniversario de la fundación de la localidad de Dolavon, Chubut, el 21 de abril
- OD-349: Homenaje al cumplirse el 158° aniversario del fallecimiento del Libertador General Don José de San Martín.
- OD-350: Información sobre diversos aspectos relacionados con el alga *Undaria pinnatifida* en el litoral marítimo. Pedido de informes.
- OD-351: Homenaje al teniente general Juan Domingo Perón al cumplirse el 34° aniversario de su fallecimiento el 1° de julio
- OD-352: Adhesión al aniversario de la comunidad trapense de Azul
- OD-353: Homenaje a la señora María Eva Duarte de Perón al cumplirse el 56° aniversario de su fallecimiento, el 26 de julio del corriente año
- OD-354: Beneplácito por la distinción otorgada al profesor doctor Carlos Hoevel, ganador del Premio Novak 2008
- OD-355: Adhesión al Día Mundial del Asma
- OD-356: Reconocimiento a la nadadora santafesina Antonella Bogarín
- OD-357: Adhesión al Día Mundial de la Nutrición
- OD-358: Adhesión al Día Mundial de la Hepatitis
- OD-360: Beneplácito por la clasificación para el Campeonato Mundial Juventud en la disciplina Ajedrez
- OD-361: Beneplácito y reconocimiento por la celebración del I Congreso Nacional de Municipios y Medio Ambiente a realizarse en Salta
- OD-402: Reasignación de partidas para la concreción de la obra Nueva Traza Ruta Nacional 38. Sección II: Acceso a Aguilares-Acceso a Concepción, Tucumán
- OD-404: Adopción de medidas para implementar el incremento de los parámetros para determinar las categorías de contribuyentes respecto del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
- OD-405: Beneplácito por el aniversario de la Escuela N° 146 Crucero General Belgrano, de Corrientes
- OD-407: Implementación de una campaña nacional de difusión sobre la osteopenia.
- OD-408: Adopción de medidas para la confección de sellos postales del Correo Argentino para 2009, alusivos a las comunidades aborígenes, en especial las del Chaco
- OD-409: Adhesión al 75° aniversario de la fundación del diario El Tiempo, de la ciudad de Azul, Buenos Aires
- OD-410: Adhesión al 55° aniversario del diario La Mañana de Bolívar, Buenos Aires
- OD-411: Adhesión al 30° aniversario del Canal 6 de Bariloche
- OD-412: Beneplácito por el Premio Chapultepec 2008, otorgado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- OD-413: Pesar por el fallecimiento del presidente honorario del Directorio de LA NACIÓN S.A., Dr. Enrique Luis Drago Mitre
- OD-416: Beneplácito por el acuerdo regional firmado en Chile para la pavimentación del tramo chileno del paso de San Francisco, que une los sectores centro-norte con nuestro país
- OD-417: Estado de los acuerdos suscriptos entre los países del Mercosur. Pedido de informes
- OD-419: Declaración de interés turístico de la realización de la tercera edición de "Expo Nieve 2008", que se llevó a cabo en el Predio Ferial de la Rural, Ciudad de Buenos Aires
- OD-420: Declaración de interés turístico de la fiesta aniversario de la localidad de Tecka, que se celebra el 11 de julio de cada año en Chubut
- OD-421: Declaración de interés turístico de la fiesta del Dique Florentino

- Ameghino, de la localidad de Villa del Dique Florentino Ameghino, Chubut, que se celebrará el día 10 de julio de 2008
- OD-422: Declaración de interés turístico de la vigilia de las ballenas, prevista para los días 30 y 31 de mayo, y la apertura oficial de la temporada de avistajes, que tendrá lugar en Puerto Pirámides el 1º de junio de 2008.
- OD-423: Declaración de interés del Honorable Senado de la Expo Turismo de Invierno, ETI, que se llevará a cabo en la Rural, Ciudad de Buenos Aires.
- OD-426: Declaración de interés educativo de la Tecnicatura Superior en Gestión Parlamentaria impulsada por la Unión Personal Civil de la Nación.
- OD-427: Adhesión al aniversario del plebiscito de 1902, en el que pobladores galeses del Chubut votaron a favor de la Argentina en los diferendos con Chile
- OD-428: Adhesión a la conmemoración del 65º aniversario de la inauguración del Museo de Bellas Artes Municipal Genaro Pérez, de la ciudad de Córdoba
- OD-429: Declaración de interés cultural del ciclo 2008 de Teatro por la Identidad
- OD-430: Declaración de interés de la presentación de la colección Ciudad de Corrientes: huellas en 420 años de historia
- OD-431: Beneplácito por la distinción como miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales otorgada a la profesora Mirta G. De Sotelo Andreau.
- OD-432: Declaración de interés al Coro Qom-Toba Chelaalapí, Resistencia, Chaco.
- OD-433: Declaración de interés del Honorable Senado del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano a realizarse entre el 8 al 13 de enero de 2009, Jujuy
- OD-434: Reconocimiento a la figura del ex presidente doctor Arturo Frondizi, al conmemorarse el decimotercer aniversario de su fallecimiento
- OD-435: Adhesión a la conmemoración de la creación de la Policía Territorial de Tierra del Fuego
- OD-436: Declaración de interés del I Encuentro Grupo de Trabajo Archiveros Patagónicos, a realizarse en Comodoro Rivadavia.
- OD-437: Declaración de interés cultural de la obra de teatro *Venimos de muy lejos, la pel kula*, a cargo del Grupo de Teatro Catalinas Sur
- OD-438: Declaración de interés del I Congreso Internacional de Literatura para Niños: Producción, Edición y Circulación, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- OD-439: Declaración de interés de las IX Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, a realizarse en San Salvador de Jujuy.
- OD-440: Beneplácito por la celebración del XXV Aniversario de la Escuela de Enseñanza Media N° 349, de Logroño, Santa Fe.
- OD-441: Declaración de interés de la realización del Curso de Posgrado en Estudios Internacionales y de la Integración Europea y Latinoamericana a desarrollarse en la Universidad Nacional de Rosario
- OD-442: Homenaje a doña María Magdalena Güemes de Tejada, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento
- OD-443: Homenaje al pueblo de la ciudad de Concarán, San Luis, al cumplirse el 150º aniversario de su fundación
- OD-444: Adhesión a la conmemoración del 446º aniversario de la fundación de la provincia de San Juan
- OD-482: Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica
- OD-483: Beneplácito por la I Jornada sobre Drogadependencia
- OD-484: Reconocimiento a la labor realizada por la Fundación Juan A. Fernández, por su trabajo para equipar con aparatología el hospital del mismo nombre
- OD-485: Adhesión al Día Mundial de los Trasplantados

- OD-486: Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indevido y el Tráfico Ilícito de Drogas
9. Consideración en conjunto de órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de cuentas de la Administración
- OD-362: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
- OD-363: Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales
- OD-364: Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo
- OD-365: Secretaría de Comunicaciones y Comisión Nacional de Comunicaciones
- OD-366: Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas
- OD-367: Dioxitek Sociedad Anónima
- OD-368: Agua y Sancamientos Argentinos S.A.
- OD-369: Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado
- OD-370: Correo Oficial de la República Argentina S.A.
- OD-371: Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades
- OD-372: Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte
- OD-373: Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial
- OD-374: Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica
- OD-375: Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo
- OD-376: Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social
- OD-377: Informe de la AGN referido a verificar los controles realizados en la CNRT
- OD-378: Resolución de la AGN sobre Administración General de Puertos
- OD-379: Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas
- OD-380: Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales
- OD-381: Proyecto de Apoyo a la Ejecución del Prodism en Río Negro
- OD-382: Banco Nación Argentina-Fideicomiso Bersa
- OD-383: Banco Nación Argentina-Fideicomiso Bersa
- OD-384: Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración
- OD-385: Programa Sectorial de Servicios Financieros
- OD-386: Ministerio de Salud
- OD-387: Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa
- OD-388: Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado
- OD-389: Programa de Corredores Viales de Integración-Fase I
- OD-390: Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
- OD-446: Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición de la provincia de Corrientes
- OD-447: Programa Sectorial de Servicios Financieros-Cooperación Técnica
- OD-448: Controles aplicados por la Secretaría de Comunicaciones, Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor y Comisión Nacional de Comunicaciones
- OD-449: Intercargo Sociedad Anónima Comercial
- OD-450: Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima
- OD-451: Proyecto de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial
- OD-452: Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires
- OD-453: Programa Jefes de Hogar
- OD-454: Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima
- OD-455: Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria
- OD-456: Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- OD-457: Dirección General de Aduanas
- OD-458: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

- OD-459: Proyecto Alcance y Resultados de las Reformas Educativas
- OD-460: Fortalecimiento de la Red de Atención Materno-Infantil de la Provincia de Buenos Aires
- OD-461: Proyecto de Reforma del Sector Salud
- OD-462: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, Río Negro
- OD-463: Telam Sociedad del Estado
- OD-464: Nación Seguros de Vida Sociedad Anónima
- OD-465: Proyecto de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos
- OD-466: Proyecto de Asistencia Técnica para Atender la Problemática del Año 2000
- OD-467: Proyecto de Infraestructura y Gestión de Desagües
- OD-468: Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Mendoza
- OD-469: Proyecto Gestión de la Contaminación
- OD-470: Programa de Modernización Portuaria
- OD-471: Secretaría de Comunicaciones, Comité Federal de Radiodifusión, Comisión Nacional de Comunicaciones y Comisión Nacional de Actividades Espaciales
- OD-472: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
- OD-473: Programa Social de Bosques
- OD-474: Instituto Universitario Nacional de Arte
- OD-475: Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono
- OD-476: Programa de Financiamiento a Municipios
- OD-477: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
- OD-478: Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino
- OD-479: Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo
- OD-480: Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares
- OD-481: Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal
- 10. Modificación del plan de labor
- 11. Texto unificado: Creación de la Comisión Especial Investigadora de ventas al exterior de productos agropecuarios
- 12. S-1477/08: Homenaje a ex gobernador de Río Negro
- 13. OD-487/08: Derogación del Código de Justicia Militar
- 14. S.2534/08: Declaración de zona de emergencia y/o desastre a departamentos de Santa Fe y el Chaco
- 15. Manifestaciones
- 16. OD 415: Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal con la República Tunecina
- 17. OD 406. Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa
- 18. OD 391: Protocolo adicional al convenio de cooperación adicional al convenio de cooperación educativa con la República de Cuba
- 19. S-1409 y 1508/08: Prórroga de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados. Moción de preferencia
- 20. OD-425/08: Modificación del Código Procesal Penal de la Nación
- 21. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
 - S-2306/08: Foro de Discusión sobre Políticas Culturales
 - S-2208/08: Encuentro Internacional Extraordinario Zicosur-Asia Pacífico.
 - S-2498/08 y otros: 414º aniversario de la fundación de la ciudad Capital de San Luis.
 - S-1362/08: Día Internacional de la Juventud.
 - S-2380/08: Día de la Radiodifusión.
 - S-2006/08 y otros: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
 - S-2467/08 y otro: Conmemoración del aniversario de la Gendarmería Nacional.
 - S-2141/08: Coro de Niños y Jóvenes de la Escuela Superior de Música de Salta en el X Festival Internacional de Coros.
 - S-2112/08: Homenaje al Dr. Mariano Boedo y otras cuestiones conexas.

- S-2107/08: Solicitud de medidas para la reparación y pavimentación de la Ruta Nacional N° 86.
- S-2106/08: Solicitud de medidas para la pavimentación de la Ruta Nacional N° 40.
- S-1963/08: Solicitud de medidas para la promoción de una reconfiguración de las Fuerzas Armadas Argentinas en el marco de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití.
- S-1782/08: Solicitud para la creación de la Unidad Postal de Correo Argentino, en la localidad de La Merced, Salta.
- S-1964/08: Beneplácito por el premio otorgado por la Fundación Justicia en el Mundo al Presidente de la Auditoría General de la Nación.
- S-1962/08: Publicación de la Revista Argentina de Arte "Luscinia"
- S-1689/08: Estudio y difusión de la obra de Hipólito Bouchard, Capitán de la Fragata La Argentina.
22. Consideración en conjunto de expedientes reservados
- S-2536/08: Declaración de interés cultural y la Fiesta de la Abuela Luisa.
- S-2528/08: Conmemoración de rendición y toma de la fragata inglesa Justine en 1806
- S-1529/08: Declaración de interés de la resolución de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano
- S-2444/07 y otros: Beneplácito por la pacífica liberación de la señora Ingrid Betancourt.
23. Apéndice:
- I. Asuntos entrados
 - II. Asuntos considerados y sanciones del H. Senado
 - III. Actas de votación
 - IV. Inserciones

Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el resto figura en el Apéndice.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 47 del miércoles 6 de agosto de 2008:

Sr. Presidente. La sesión está abierta.

1. Izamiento de la bandera nacional

Sr. Presidente. Invito a la señora senadora por la provincia de La Rioja, Teresita Nicolasa Quintela, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

Puestos de pie los presentes, la señora senadora Quintela procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Aplausos.

3. Plan de labor parlamentaria

Sr. Presidente. Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.

— *El texto es el siguiente:*

Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 06.08.08

Sesión para consideración de Acuerdos.

Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.

Consideración en conjunto de los Ordenes del Día referentes a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, que por Secretaría se enunciarán.

Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 487, 391, 406, 247, 415 y 425.

Tratamientos sobre tablas acordados:

Texto unificado en los proyectos de resolución de los senadores Morales y otros, y Pichetto y otros, creando una Comisión Especial Investigadora de las operaciones que resultaren presuntamente fraudulentas respecto de las declaraciones juradas de venta al exterior de productos agropecuarios. (S-2463 y S-2478/08)

Proyecto de ley del senador Giustiniani declarando en emergencia agropecuaria a diversos departamentos de la provincia de Santa Fe. (S-2123/08)

Tratamientos sobre tablas a solicitar:

Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés “El Foro de Discusión sobre Políticas Culturales”. (S-2306/08)

Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el Encuentro Internacional Extraordinario Zicosur-Asia Pacífico. (S-2208/08)

Texto unificado en los proyectos de declaración de la senadora Negre de Alonso y de los senadores Rodríguez Saá y Pésico, adhiriendo a la conmemoración del 414° aniversario de la fundación de la ciudad Capital de San Luis. (S-2498, S-2423 y S-1560/08)

Texto unificado en el proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, Pésico, Giusti y Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud. (S-1362, S-1923, S-2024 y S-2181/08)

Proyecto de declaración del senador Pésico, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Radiodifusión. (S-2380/08)

Texto unificado en los proyectos de declaración de los senadores Giusti, Gallego, Basualdo, Escudero y Viudes, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones

Indígenas. (S-2006, S-2204, S-2390, S-2431 y S-2480/08)

Texto unificado en los proyectos de declaración de las senadoras Viudes y Giusti, adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la Gendarmería Nacional. (S-2467/08 y S-1768/08)

Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés la presentación del Coro de Niños y Jóvenes de la Escuela Superior de Música de Salta en el X Festival Internacional de Coros. (S-2141/08)

Proyecto de declaración de la senadora Escudero y otros rindiendo homenaje al Dr. Mariano Boedo y otras cuestiones conexas. (S-2112/08).

Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para la reparación y pavimentación de la Ruta Nacional N° 86. (S-2107/08)

Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para la pavimentación de la Ruta Nacional N° 40. (S-2106/08)

Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para la promoción de una reconfiguración de las Fuerzas Armadas Argentinas en el marco de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (S-1963/08)

Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando la creación de la Unidad Postal de Correo Argentino, en la localidad de La Merced, provincia de Salta. (S-1782/08)

Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, expresando beneplácito por el premio otorgado por la Fundación Justicia en el Mundo, al Presidente de la Auditoría General de la Nación. (S-1964/08)

Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés la publicación de la Revista Argentina de Arte "Luscima". (S-1962/08)

Proyecto de declaración de la senadora Escudero, expresando la necesidad de fomentar la investigación, estudio y difusión de la obra de Hipólito Bouchard, Capitán de la Fragata La Argentina. (S-1689/08)

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. Aprobado.

13. OD-487/08: Derogación del Código de Justicia Militar

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. Señor presidente: como se va a pasar a tratar la reforma del Código de Justicia Militar y se encuentra la señora ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, en el Salón Eva Perón, solicito que la autorice a ingresar al hemicycle para que pueda presenciar este debate.

Sr. Presidente. Se invita, entonces, a la doctora Nilda Garré a que ingrese en el recinto.

Luego de unos instantes, ingresa en el recinto la señora ministra de Defensa, doctora Nilda Garré

Sr. Presidente. Corresponde la consideración del dictamen en mayoría de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se deroga el Código de Justicia Militar y se modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.

Sr. Prosecretario (Canals). Secretaría comunica que se ha recibido nota de la Honorable Cámara de Diputados por la que hace constar en la fe de erratas que el expediente CD-94/07 en su anexo 4, en el tercer párrafo, donde dice "artículo 3^o" deberá decir "artículo 4^o".

Sr. Presidente. En consideración en general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Marín.

Sr. Marín. Señor presidente: como miembro informante de este proyecto en revisión que ha tenido como cabecera la Comisión que presido, debo hacer un reconocimiento especial, por su preocupación e idoneidad, a aquellas personas que nos honraron en la Comisión que fue integrada oportunamente por la señora ministra de Defensa. Me refiero a Eugenio Raúl Zaffaroni, en representación del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho; Alberto Binder, en representación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; Rodolfo Mattarolo, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Gabriel Valladares, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que participó en calidad de observador; Alejandro Slokar, en su carácter de secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios; Gastón Chillier, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales; coronel Omar Manuel Lozano, asesor jurídico de la Dirección de Planeamiento del Estado Mayor General del Ejército; contralmirante Agustín Reilly, en su carácter de auditor general de las Fuerzas Armadas; Mirta López González, en representación de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina; y Diego Freedman, en representación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

Por lo menos quien les habla ha tenido la posibilidad de tener información acabada sobre la derogación del Código de Justicia Militar que hoy se trata, reconociendo también que oportunamente en 2005 y en 2007 fue presentado un proyecto por parte del senador Giustiniani.

En esta casa se desarrollaron esas jornadas que nos han permitido escuchar a juristas,

⁹Ver el Apéndice.

¹⁰ Ver el Apéndice

técnicos y profesionales y ver, indudablemente, que el Código de Justicia Militar no quiero decir que estuviera en desuso no había sido revisado como correspondía.

Se cumple con una demanda que no digo que sea histórica, pero sí que tenía su tiempo y, a la vez, se vela por una igualdad en derechos y garantías de nuestra sociedad a fin de posibilitar un profundo aggiornamiento del sistema a parámetros internacionales incorporados por nuestra Constitución.

Algunos consideran que es una deuda pendiente para con nuestros militares. En mi opinión, pienso que se trata de una reforma que se la debemos a la sociedad toda. Me parece que a esta altura seguir hablando de militares como algo aparte de nuestra sociedad no es una cuestión correcta. Pareciera que los militares se quedan fuera de la civilidad, lo cual me parece un absurdo. En estos temas los términos son importantes. Civiles somos todos, y los militares son parte de nuestra sociedad y, por ende, la deuda es para con toda la sociedad y no para con una parte de ella.

El proyecto sancionado por la Cámara de Diputados introduce algunas modificaciones a la norma que emanó del Poder Ejecutivo. Tal el caso de la eliminación de las multas como falta disciplinaria por violentar el derecho alimentario. Esa modificación, precisamente, fue elaborada por una comisión en 2006 integrada por los especialistas que fueron aludidos en su momento.

Las modificaciones fueron consensuadas ya que podían generar cierta rispidez. Sin embargo, presumo que la señora ministra de Defensa ha tenido la habilidad y la idoneidad de dejar sin efecto el Código de Justicia Militar y aplicar el Código de Procedimientos que nos rige a todos los ciudadanos.

El proyecto consta de nueve artículos y cinco anexos.

A saber, el Anexo I establece modificaciones al Código Penal y Procesal Penal.

El Anexo II corresponde al establecimiento de un procedimiento penal militar para tiempos de guerra y otros conflictos armados. Este procedimiento es de excepción, y lo quiero remarcar porque solamente se aplica en casos excepcionales que impidan sacar de la zona al infractor y ponerlo a disposición del juez federal competente.

Por ello, se estableció que los delitos cometidos en tiempos de guerra serán investigados y juzgados según el régimen ordinario previsto para el tiempo de paz la justicia federal, salvo cuando las dificultades provenientes de las condiciones de la guerra o de las operaciones iniciadas sean manifiestas e insuperables y la demora en el juzgamiento pudiera ocasionar perjuicios en la eficiencia operativa o en la capacidad de combate.

El Anexo III contiene las instrucciones a la población civil en tiempos de guerra y otros conflictos armados.

Los fundamentos son similares a los anteriores y con dicho anexo se pretende resolver el problema de la necesidad en que el comandante de zona está habilitado en todo el mundo para legislar, dado la urgencia y el peligro inminente y masivo en determinadas circunstancias.

Hoy no se plantean los problemas del siglo XIX porque de ninguna manera es necesario rehabilitar la pena de muerte ni habilitar al comandante a legislar en materia penal. Es suficiente con que pueda promulgar las instrucciones a la población civil.

— *Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador Carlos A. Reutemann.*

Sr. Marín. En este sentido, se prevé que las normas e instrucciones obligan con fuerza de ley a todas las personas que se encuentran en las zonas de operaciones y/o combate. Sin embargo, a fin de evitar posibles perversiones se prohíbe la imposición de obligaciones innecesarias o que lesionen la intimidad o los deberes de conciencia de las personas, tal como dispone el artículo 3°.

También se pretenden contemplar otras situaciones, como por ejemplo la necesidad de ordenar un oscurecimiento de una ciudad frente al peligro de un bombardeo o situación similar, que justificaría que la autoridad militar pueda establecer normas de cumplimiento obligatorio por parte de la población civil.

Digo que son excepciones, porque la derogación del Código de Justicia Militar trata, en definitiva, la inclusión de la conducta de ellos dentro del Código Penal y del Código Procesal Penal.

El Anexo IV establece el Código de Disciplina para las Fuerzas Armadas. Oportunamente, esto será explicado por la compañera senadora, pues realmente su comisión ha efectuado el trabajo casi diría esencial y fundamental para que se llevara a cabo hoy esta sesión,

tratando de derogar el Código de Justicia Militar.

Por último, el Anexo V se refiere a la creación del servicio de justicia conjunta de las fuerzas armadas, el cual reitero es absolutamente respetuoso de las garantías constitucionales y del debido proceso.

Los grandes ejes sobre los que se basa esta reforma son hacer valer los derechos y garantías procesales en toda nuestra sociedad.

Voy a utilizar una reflexión del doctor Zaffaroni, que no hace más que reflejar la paradigmática realidad de hoy.

Veamos: "Por la aplicación de tratados y convenios internacionales que velan por las garantías y la igualdad, existe la posibilidad de que prisioneros de guerra enemigos posean mayores derechos que nuestros soldados argentinos en tiempos de paz."

Así de paradógica es esta realidad. Así de desactualizado se encuentra, realmente, nuestro Código de Justicia Militar.

Si nos centramos en el segundo libro del Código de Justicia Militar, en la parte de procedimientos encontraremos una diversidad de aspectos que se convierten en vicios, que afectan claramente el debido proceso.

Por ejemplo, en la declaración indagatoria no se le impone el hecho por el cual se lo indaga. Luego, en igual oportunidad, en la declaración indagatoria la ley no conmina a que se imponga al causante la prueba que hubo en su contra. Pregunto, entonces, ¿de qué se va a defender, si no conoce el hecho por el cual se lo indaga, ni las pruebas en su contra?

A aquellos que, particularmente en el común de la sociedad, consideran que el Código de Justicia Militar realmente es un código especial para los militares, debo decirles que es todo lo contrario: importa una indefensión para nuestros militares, porque cuando deben afrontar algún juicio, su derecho de defensa se ve completamente obstaculizado.

Con estas deficiencias, también vemos que este obsoleto código tampoco permite la posibilidad de elegir un abogado de confianza, ni posee un régimen de nulidades; ni herramientas recursivas a lo largo del proceso.

Además, si bien debo reconocer que para tiempos de guerra establece un procedimiento especial que contiene la posibilidad de una revisión judicial exhaustiva, vulnera garantías esenciales como tener un juez natural, imparcial e independiente.

La jurisdicción militar no puede estar en manos de legos. Un jurado no puede estar compuesto por legos. Vuelvo a coincidir con nuestro destacado juez de la Corte: por la dependencia jerárquica de los jueces militares respecto del Poder Ejecutivo como comandante en jefe, es necesario evitar sometimiento a amenazas de sanciones disciplinarias por parte de cualquier poder del Estado.

Creo que esta dependencia directa de estos legos con el Poder Ejecutivo de turno hace menos efectiva la tan pregonada y muchas veces incumplida garantía de independencia de los poderes.

Segundo, adecuar nuestro ordenamiento jurídico con tratados internacionales y también con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Considero que en la actualidad nuestra legislación penal militar es absolutamente incompatible con nuestro sistema jurídico; esto es: contrario a las declaraciones de inconstitucionalidad de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación - Caso López, etcétera - y a tratados internacionales incorporados en la reforma constitucional de 1994 en el artículo 75, inciso 22, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El sistema de justicia militar de la República Argentina ofende puntualmente el artículo 8° de dicha Convención y a nuestra Constitución de 1853. Pero lo peor de todo es que las primeras víctimas de esta incompatibilidad legislativa son nuestros propios militares, ya que la arbitrariedad a la que estos deben ser sometidos, sobre la base de esa legislación, es absolutamente innegable.

Y, tercero, volcar el tratamiento de los delitos esencialmente militares a la órbita de la Justicia Federal; a la de aquellos magistrados que nos juzgan a todos.

Este eje creo que es muy claro. Este proyecto pretende incorporar al Código Penal aquellos delitos que actualmente se encuentran regulados por el Código de Justicia Militar conscientemente depurados y actualizados, omitiendo algunos que ya han perdido funcionalidad o porque su tipificación más correcta corresponde al ámbito disciplinario militar.

Aquellos delitos en los que el sujeto activo no es condicionante en la conducta o en el agravamiento de la pena son asimilables y subsumibles a los ilícitos cometidos por el resto de

la ciudadanía; y aquellos otros —y si *delitae propria*—, en donde sí es relevante el sujeto activo son incorporados como agravante dentro del texto del Código Penal común, especificando la condición de militar del responsable y considerando que por tal la obligación de cuidado es en general mayor.

Es decir, existen tipos penales que a veces son delitos que, según la conducta que describen, la puede realizar cualquiera, como el homicidio simple o el robo; y en otros casos el sujeto debe reunir determinadas condiciones o cualidades —ser funcionario público, o militar en este caso—, con lo cual la incorporación no sólo es jurídicamente necesaria sino que también es procesalmente correcta.

Frente a esto hemos oído algunas críticas que mencionaban la imposibilidad de que jueces ordinarios fallaran sobre casos o conductas esencialmente militares, por considerar la ignorancia de estos en temas netamente jurídico militares. Por el contrario, consideramos que bajo este pretexto tampoco deberían fallar sobre casos de mala praxis, de ingeniería o de otro tema específico.

Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2° del H. Senado, senadora Liliana Negre de Alonso.

Sr. Marín. Creo y concuerdo, como lo ha manifestado el señor ministro de la Corte, en que para esto resultan necesarias las pericias militares, así como los jueces piden pericias en otros tipos específicos que no son materia para la cual están preparados.

De ahí que este hecho de pedir especificaciones y justificar el Código de Justicia Militar creo que es una forma de desmembrar el Código Penal.

De esta manera se van a adecuar las conductas sancionadas y los procedimientos a las necesidades de eficacia del servicio, pero sobre todo a las exigencias que la Constitución Nacional determina en su artículo 18.

Por último está el tema de la erradicación de la pena de muerte. Y debo reconocer que oportunamente el senador Rossi también presentó un proyecto para eliminarla.

Este punto pareciera irreal hoy en día, pero no lo es; más allá de que por la aplicación del Código de Justicia Militar esta herramienta no se haya utilizado desde 1934 ó 1935.

Debido a esta previsión del Código aparecemos en las estadísticas internacionales de países abolicionistas que mantienen la pena de muerte, aunque no la estemos aplicando desde hace muchísimos años. Con lo cual, como país tenemos enormes presiones internacionales.

Hace poco, en las jornadas organizadas aquí, escuchamos al auditor general de la Nación, Leandro Despouy, que nos advertía sobre esto, diciéndonos que una de las recomendaciones del seno del Consejo de las Naciones Unidas fue justamente la de ratificar el protocolo sobre abolición de la pena de muerte. Digo más; nuestro país tiene dos casos en los que se ha obligado a modificar su sistema de justicia militar: Correa Belisle vs. Argentina y Argüelles y otros vs. Argentina. En estos casos nuestro país se ha comprometido a reformar integralmente la justicia militar, en un todo de acuerdo con los estándares internacionales, que creo que hoy es lo que contempla esta modificación —yo diría derogación— del Código de Justicia Militar.

Entiendo que estos son los ejes por los que se plantea esta reforma. Me parece que más allá de las diferencias ideológicas —que las hay y que algunos de los colegas senadores seguramente las va a plantear— o técnicas sobre temas puntuales, el espíritu es cumplir con una deuda, que no llamaría histórica porque si analizamos un poco la realidad de nuestro país creo que también hay momentos en los cuales se puede trabajar en determinados aspectos; y considero que este es uno de ellos.

Por eso, debo señalar mi reconocimiento y destacar el hecho de haber podido adquirir la verdadera dimensión de la irregularidad que tiene este Código de Justicia Militar. Asimismo, destaco la preocupación de la señora presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, el objetivo buscado por la señora ministra de Defensa y el trabajo de la Comisión que, por lo menos a quien les habla, permitió conocer en profundidad un tema que confieso no conocía.

En virtud de ello, propongo a este Cuerpo la aprobación del proyecto en consideración.

Sra. Presidenta (Negre de Alonso). Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. Señora presidenta: sin duda, como lo ha dicho el miembro informante, la reforma del Código de Justicia Militar es una deuda pendiente de la estructura jurídica argentina. Verdaderamente, esta reforma nunca fue abordada; ni siquiera por los propios doctrinarios del Derecho Penal.

Se trata de un Código gestado en 1951, cuya reforma de 1984 garantizó dos aspectos fundamentales: por un lado, la competencia militar en el juzgamiento de delitos involucrados por

los propios integrantes de las fuerzas armadas; y, por el otro, la facultad de revisión como órgano jurisdiccional por parte del propio Poder Judicial de la Nación.

Sin embargo, la reforma de 1984 no ha hecho más que demostrar la precariedad normativa en que se sustenta este Código de Justicia Militar, porque los principales perjudicados de esta justicia paralela a la del Poder Judicial de la Nación son los integrantes de las fuerzas armadas.

Por lo tanto, si bien estas modificaciones fueron importantes, las falencias demostradas se vinculan con la delimitación de la competencia, pues no hay delitos típicamente militares comprendidos en el Código de Justicia Militar sino que más de un ilícito que comprendía el propio Código también estaban contemplados en el Código Penal de la Nación.

Por otra parte, con el caso *Correa Belisle* fallo al cual me referiré oportunamente también se demostró la precariedad de revisión del Poder Judicial de la Nación respecto de las resoluciones emitidas por los tribunales castrenses.

Creo que esta reforma surge a la luz por dos cuestiones centrales. En primer lugar, por la cuestión interna, por el aspecto constitucional, porque este Código de Justicia Militar, la competencia castrense, no garantiza el debido proceso, es decir, aquel que la Corte ha definido como el que resguarda las instancias de acusación, defensa, prueba y sentencia. Eso ha quedado reflejado en marzo de 2007 en el fallo *López*, al que también ha hecho referencia el miembro informante. Creo que es ejemplar el caso *López, Ramón Ángel s/ Recurso del artículo 445 bis del Código de Justicia Militar*, que termina resolviendo en queja la propia Corte Suprema, porque allí se dice que en el marco de las competencias que se le otorgan a los tribunales militares, estos no tienen jurisdicción en el aspecto constitucional ni en el internacional sino que son simples tribunales administrativos. Y un tribunal administrativo no tiene la facultad de aplicar penas.

Si uno parte de la base decía la Corte de considerar que justamente la facultad jurisdiccional surge de ser el presidente de la República el comandante en jefe; y el presidente de la Nación, que está al frente del Poder Ejecutivo, no tiene facultades jurisdiccionales de características penales, menos las puede poseer un inferior jerárquico.

Por lo tanto, con ese fallo se estableció la inconstitucionalidad por dos aspectos centrales: primero, porque los integrantes de los tribunales militares no garantizan la imparcialidad, ya que dependen del Poder Ejecutivo nacional; y segundo, porque se vulnera el derecho de defensa, puesto que como se ha dicho acá, el Código de Justicia Militar no habilita a que uno de sus pares, un integrante de las fuerzas armadas, pueda ser defendido por abogados civiles, es decir que están sometidos a los propios defensores que establece la estructura militar.

La Corte explica muy bien este tema y dice que esto es tan grosero que hasta la propia Convención de Ginebra garantiza para los prisioneros de guerra la posibilidad de defenderse por un abogado de confianza. Es decir que este Pacto es mucho más permisivo que nuestro propio ordenamiento, que limita a los integrantes de las fuerzas armadas a defenderse con un abogado surgido de sus propios pares y no con un abogado civil.

— *Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto Cobos.*

Sr. Petcoff Naidenoff. Acá también se planteó un gran inconveniente desde la faz práctica, porque a partir de este fallo todos los sumarios administrativos de índole penal lógicamente iban a terminar con una declaración de nulidad e inconstitucionalidad por parte de la Corte. Pero la justicia militar continuaba su funcionamiento.

A la par del aspecto interno, está la cuestión internacional, que tiene que ver con los compromisos que ratificó el país a través de los tratados internacionales, fundamentalmente con obligaciones vinculadas a derechos humanos y el sometimiento a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica.

En 1994 se plantea el caso del oficial Rodolfo Correa Belisle, a partir del asesinato del conscripto Carrasco, donde este militar es citado a declarar como testigo. Y aquí viene la cuestión referida al aspecto internacional, porque cuando se lo cita como testigo, este oficial declara bajo juramento de decir la verdad de todo cuanto supiere, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico legal, que él tomó conocimiento de operaciones del Ejército tendientes a encubrir determinadas pruebas. También dijo que había escuchado mentir al propio general Balza; y si escuchó mentir al propio general Balza, de ahí para abajo se puede esperar cualquier cosa.

A partir de ese testimonio, el general Balza lo denuncia en la jurisdicción militar por el

delito de irrespetuosidad. En conclusión, Correa Belisle termina cargando con una condena de tres meses de arresto y creo que es dado de baja. En consecuencia, apela ante la Justicia Federal del Neuquén, tribunal que sostiene que no se trata de una cuestión recursiva sino estrictamente militar; que está en juego la calidad, la esencia y el bien jurídico protegido, y no puede entender en la causa.

En 1997 el Centro de Estudios Legales y Sociales interpone una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denuncia este caso de Correa Belisle por la violación de las garantías del debido proceso, de la igualdad ante la ley, de la libertad y de la justicia. Pero específicamente plantea tres aspectos: por una parte la violación de la garantía de la imparcialidad. Así, en primer lugar, se dice que no hay imparcialidad, porque los integrantes del Consejo de Guerra dependían del general Balza. En segundo lugar, porque Correa Belisle tampoco tenía derecho a defenderse por un abogado civil, porque cuando lo planteó, el Consejo de Guerra desechó justamente al abogado civil propuesto, pues el Código de Justicia Militar establecía que el letrado únicamente podía ser uno de sus pares. Y, en tercer lugar, porque este fallo también hacía referencia a la cuestión de la violación de determinadas pruebas, es decir, el Consejo de Guerra no emitió pruebas que tranquilamente podrían haber logrado la culminación de este proceso.

En una primera instancia el Estado Argentino negó todo tipo de responsabilidad, pero cuando en 2004 la Corte Interamericana admite el planteo de Correa Belisle, la Cancillería propone una solución amistosa. Por una parte, la Auditoría General de las Fuerzas Armadas reconoce que este Consejo de Guerra no debiera haber sido implementado, así como también se compromete a iniciar este proceso de reforma legislativa.

Por eso cito estos dos antecedentes, porque me parece que son centrales. Tanto el del caso López como el del aspecto internacional, ya que el incumplimiento del Estado Argentino en esta materia ha precipitado de manera saludable la reforma de este Código de Justicia Militar.

Nosotros, en general, acompañamos el proyecto y el espíritu de la reforma; es decir, la derogación del Código de Justicia Militar, el sometimiento de los integrantes de las fuerzas militares en tiempo de paz a la Justicia Federal y la fijación de un régimen disciplinario autónomo, que nada tiene que ver con la legislación penal.

Por lo tanto, acompañamos la estructura de la normativa de la propia ley; las reformas del Código Penal, que nos parecen importantes; los agravamientos; la reforma del Código Procesal Penal, que tiende justamente a dejar sin efecto el abocamiento a la competencia de la jurisdicción militar en función del sometimiento de los delitos ante la Justicia Federal; y la abolición de la pena de muerte. En este sentido, si mal no recuerdo, la última pena de muerte se aplicó en 1934 ó 1935; y si bien desde ese año hasta la fecha no se la ha utilizado, también esta era una materia pendiente en nuestro país.

Como lo ha dicho el miembro informante, esta es una deuda más de los integrantes de las fuerzas armadas para con la propia sociedad. Ahora bien, que también quede bien en claro que esta es una reforma que beneficia a los integrantes de las fuerzas armadas, porque ellos tienen el derecho, en primer lugar, de garantizar la institucionalidad de esta fuerza y, en ese contexto, como cualquier ciudadano, tienen derecho a beneficiarse de los principios de igualdad ante la ley, del debido proceso y de ser juzgados por una Justicia imparcial e independiente, la que es garantizada únicamente por el Poder Judicial de la Nación.

Más allá de este acompañamiento en general, nosotros tenemos dos objeciones concretas: dos capítulos del anexo III y el artículo 10 del anexo I, referido a la incorporación del artículo 238 bis del Código Penal. Más allá de su tratamiento en particular quiero dejar sentada nuestra posición acerca de por qué no acompañamos el anexo III ni la incorporación del artículo 238 bis del Código Penal.

Si me permiten voy a leer el artículo 238 bis propuesto por el artículo 10. Esta norma incorpora que al militar que pusiere manos en el superior sin lesionarlo o causándole lesiones leves, será penado con prisión de uno a tres años. En la segunda parte de este artículo se incorpora un agravante porque establece que si el hecho tuviera lugar frente al enemigo o a tropa formada con armas o si se cometiere en número de seis o más, el máximo de la pena será de seis años.

En primer lugar, ¿qué significa la expresión "pusiere manos"? Es decir, es un contenido indefinido, impreciso y ambiguo. ¿Qué puede ser: cachetear, palmear o golpear? Si tomamos como parámetro nuestro Código Penal de la Nación, allí se tipifica un delito, una conducta, pero a la par, ante un hecho puntual está el efecto del resultado del daño. Es decir, ante el daño hay

una sanción concreta.

En la primera parte de esta norma se habla de un militar que puede poner manos sin causar lesión. Es decir, sin causar lesiones puede estar sujeto a una eventual condena de uno a tres años de prisión. Me parece que esto tiene que ver más con una cuestión disciplinaria. Si poner manos o hacer una bravuconada como quiera se que se llame, sin lesionar, rompe la estructura jerárquica de disciplina, de mando y obediencia que se da justamente en el ámbito castrense, me parece que es una cuestión disciplinaria que no merece ser incorporada al Código Penal.

Por otra parte, aquí se incorporan agravamientos, porque si este hecho tiene lugar frente al enemigo o frente a la tropa formada con armas, se maximiza la pena hasta seis años. Aquí sí que esto es muy peligroso, pues hay un doble agravamiento: el especificado en este artículo 10, o sea, en el artículo 238 bis del Código Penal, y el que está contemplado en el artículo 92 del mismo cuerpo legal, porque este agrava los delitos cometidos en el marco de lesiones y los remite al artículo 80. Es decir, bajo las mismas circunstancias que generan el homicidio calificado también se comprende el agravamiento.

Por lo tanto, si nos remitimos a nuestro Código Penal, cualquier integrante de las fuerzas de seguridad va a contemplar un agravamiento atenuado conforme al artículo 92, que nos remite al artículo 80, y un agravamiento agravado, establecido en el artículo 238 bis del Código Penal. Entonces, este doble agravamiento es absolutamente innecesario. Por eso no estamos de acuerdo con la incorporación del artículo 238 bis.

Al respecto, nos parece que el Código Penal es muy claro, ya que establece cuáles son las lesiones leves, graves o gravísimas y los propios agravamientos. Inclusive, con esta reforma en el artículo 80 se incorpora otro agravamiento, que tiene que ver cuando el homicidio se da en el contexto de un inferior para un superior jerárquico. Por lo tanto, creo que es un artículo innecesario en el contexto de la reforma.

Nuestra segunda objeción se refiere al Anexo III, que es muy particular porque nos habla de las instrucciones a la población civil para tiempos de guerra y otros conflictos armados. Sintéticamente, este Anexo que consta de cinco artículos da a entender que en ocasión de conflictos armados, en el teatro de operaciones, se podrán dar instrucciones a la población civil con fuerza de ley. O sea, instrucciones obligatorias a la población civil.

¿Qué es lo preocupante? En primer lugar, se habla de conflictos armados; y no es el único párrafo de la norma al que se hace referencia a esta expresión. Me parece que este Anexo es contradictorio con los principios sentados en la Ley 23544, de defensa nacional. ¿Por qué puede ser contradictorio? Esta es una norma que se sancionó en 1998, con un debate muy profundo, que delimitó el marco estricto de funcionamiento de las fuerzas armadas para el contexto de defensa nacional de las fuerzas de seguridad interior.

Las cosas fueron muy claras: por un lado está la Ley 24059, de seguridad interior; y por otro, está la Ley 23544, de defensa nacional.

En el contexto de la ley de defensa nacional siempre estuvo presente esa diferenciación. Pero dicha norma también fue muy clara cuando definió bajo qué condiciones, motivos o circunstancias se involucran las fuerzas armadas o de seguridad nacional. Y, justamente, habla de agresión de origen externo y de conflicto armado internacional. Pero nada dice acerca de conflictos armados sino que hace referencia a agresión de origen externo y a conflicto armado internacional.

En esas dos hipótesis opera la ley. Es decir que ante la agresión externa o un conflicto armado internacional, se hace operativa la ley de defensa nacional. Y en el marco de dicha norma, el presidente de la República es el comandante en jefe de la República, da las instrucciones y tiene a su cargo todas las cuestiones vinculadas con el proceso especial que vive un país ante un conflicto bélico.

Ante ese contexto es decir, el de la propia guerra, la ley fija que el presidente podrá establecer teatros de operaciones; que las autoridades constitucionales mantienen plena vigencia con excepción de si se declara el estado de sitio; y que cuando se dicta el estado de sitio, continúa funcionando plenamente el Poder Judicial de la Nación.

Entonces, si el comandante en jefe de la República que es el presidente tiene a su cargo el teatro de operaciones y puede dictar resoluciones a sus inferiores jerárquicos, justamente para materializar los aspectos concernientes a la guerra como pueden ser las instrucciones concretas a la población civil, nos parece preocupante que los comandantes o autoridades jerárquicas inferiores como los responsables de destacamentos o de unidades de cualquiera

de las fuerzas armadas puedan dar instrucciones a través de bandos a la población civil. Considero que dichas instrucciones a la población civil están resguardadas en el marco de la ley de defensa nacional. Además, es muy clara: nos habla de agresión externa y conflictos.

Y respecto de los conflictos, tenemos que ser un poco cautos. Por la historia reciente de nuestro país, permitir que ante conflictos armados puedan emitirse instrucciones a la población civil a través de bandos militares a pesar de que la ley de defensa nacional fue arduamente discutida, justamente para delimitar los dos aspectos, es decir, seguridad interior por un lado y defensa nacional por el otro, es una medida innecesaria, pues esa situación ya está contemplada en la propia ley de defensa nacional. Además, en caso de faltar algo, podrá suplirse por vía de la reglamentación.

Es por ello que desde la bancada de la Unión Cívica Radical acompañamos en general, y no apoyamos, por las razones señaladas, el Anexo III ni el artículo 238 bis, receptado en el Anexo I, artículo 10, de esta reforma.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. Señor presidente: es un hecho muy importante que hoy estemos considerando la derogación del Código de Justicia Militar. Al respecto, saludo la presencia de la señora ministra de Defensa, doctora Nilda Garré.

Asimismo, hago mío el reconocimiento que hizo el miembro informante al trabajo realizado durante mucho tiempo por una comisión conformada por especialistas y dirigida por el actual ministro de la Corte Raúl Zaffaroni e integrada por miembros de las fuerzas armadas.

Si bien el proyecto que estamos tratando se vincula con un tema que no tendrá prensa, sí tiene una alta trascendencia. Esta norma reúne cuestiones fundamentales que hacen a las relaciones entre la política y la moral y entre la democracia y los derechos humanos; y también al avance de la práctica de la humanidad.

Lo digo sin exagerar, porque al integrar la Constitución Nacional a todos los miembros de las fuerzas armadas que hasta la sanción de esta ley no lo estaban, marca en sí un hecho trascendente. Y señalo que marca un hecho trascendente en el adentro y en el afuera. En el adentro, porque como aquí se mencionó, representa que los miembros de las fuerzas armadas van a tener su derecho de defensa y una justicia independiente como tiene cualquier ciudadano argentino, porque ellos también lo son. Y en el afuera, porque representa la necesidad de terminar con la justicia de pares, es decir, la justicia especial, que tuvo una alta significación histórica no sólo en lo que hace al desarrollo de la historia de los derechos humanos en el mundo y de la justicia, sino concretamente en nuestro país con los inicios de la democracia.

En este sentido, no nos podemos olvidar que en 1983, producto de las primeras modificaciones importantes que se hicieron durante el gobierno del doctor Alfonsín, que no significó la transformación de fondo que estamos realizando ahora, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgó a sus pares por los delitos de lesa humanidad y la violación sistemática de los derechos humanos. Por supuesto que no tuvo efectividad. Pero eso abrió paso al histórico juicio a las juntas militares, es decir, a que fuera la Justicia ordinaria la que tomara en sus manos, como correspondía, el juzgamiento de aquellos hechos; y esto lo estamos viendo hasta nuestros días, ya que la Justicia le da a los genocidas la posibilidad de defensa y de que sean juzgados por tribunales independientes.

La Justicia de pares era la que tenían los nobles para sí mismos. La Justicia de los plebeyos y del clero era distinta. Es decir, recién en el siglo XVIII, con *El espíritu de las leyes*, de Montesquieu, se sentaron las primeras bases del sistema republicano, en donde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo debían funcionar con un Poder Judicial independiente. Pero fue la Revolución Francesa la que finalmente sentó las bases fundamentales para que esa Justicia independiente empezara a funcionar.

En nuestro país fue a principios del siglo XX, con el gobierno de Roca, con la constitución de nuestras fuerzas armadas, que se encargó el primer Código de Justicia Militar al auditor general de guerra y marina, José María Bustillo. Este Código, que había tenido como redactor a Aristóbulo del Valle y a Estanislao Zeballos, fijó todas estas normas que hoy estamos derogando, que hoy suenan anacrónicas y a penas draconianas. Resulta terrible leer el Código de Justicia Militar y encontrar la pena más grave, como es la de muerte. Al respecto, como bien dijo el miembro informante, nos encontrábamos ante una contradicción, porque si bien no existía en la Argentina la pena de muerte para los ciudadanos civiles, sí estaba prevista la posibilidad del fusilamiento por la espalada para los militares.

Es importante que la norma se vaya ajustando a los nuevos tiempos, más allá de que se

decía que se trataba de una ley inaplicable. No es así. Si está la norma es porque existe. De ahí la trascendencia de la modificación y de lo que va a sancionarse esta noche. Se trata de normas cuya modificación es muy difícil.

Me pasó una experiencia similar con la ley 25871, de migraciones. Hubo que modificar esa norma la ley "Videla", una ley de facto cuyo antecedente era la ley de residencia, que perseguía a los trabajadores y a los inmigrantes; los trabajadores inmigrantes considerados por su categoría de tales como delincuentes.

Para poder fundamentar el debate de la necesidad del cambio debimos llegar al punto de estar cuestionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había abierto una causa contra la República Argentina. La misma situación que se dio con los dos casos que habilitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que planteó en nuestro país la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar.

Desde el socialismo, y juntamente con el ARI y la Coalición Cívica, dejó sentado que voy a votar a favor de la norma, ya que siempre hemos planteado esta preocupación.

Desde 1913 Alfredo Palacios hablaba de la flagrante contradicción del Código de Justicia Militar, porque constituía el paradigma de la unión de dos instituciones incompatibles entre sí, ya que se encuentran direccionadas con principios opuestos.

Las fuerzas armadas, configuradas alrededor de la disciplina y la dependencia jerárquica y sometidas en su actuación a los dictados del Poder Ejecutivo, y, por el otro lado, la Justicia, caracterizada por la independencia y la imparcialidad.

Es decir que la articulación de estos dos hechos se hace en este momento. Me refiero a que exista una Justicia de carácter ordinario, que es la que trata los delitos de todos los ciudadanos del país, aun siendo militares; y un régimen disciplinario de las fuerzas armadas, que es el que fija el carácter vertical y de la disciplina militar que debe ser contemplado.

En el proyecto de ley del que somos autores habíamos propuesto la separación de la derogación del Código del régimen de disciplina militar. Y lo hacíamos, porque creíamos que iba a ser mucho más importante que en el día de hoy se derogaran todas esas normas draconianas y obsoletas y se diera un paso fundamental hacia la modernización de las fuerzas armadas, integrándolas a la Constitución Nacional; y que luego, en un paso posterior, se discutiera el régimen disciplinario.

De todas maneras, pensamos que hay cuestiones que son de un avance sustantivo y que reflejan algunas precisiones que queremos hacer con relación a dos aspectos que recién planteaba el senador Petcoff Naidenoff.

Una cuestión fundamental es la referida a los tiempos de guerra y de paz. Yo pregunto, en la actualidad, cuál es el límite preciso que define el tiempo de la guerra y el de la paz. Al respecto, se abrió un debate muy interesante a raíz de que, al comenzar el siglo XXI, quizá la humanidad podría superar la situación de guerras. Es que, a pesar de que la humanidad tuvo el desarrollo tecnológico más importante de la historia durante el siglo XX, este fue el más sangriento de toda la historia: hubo 200 millones de hombres y de mujeres muertos por la acción humana, dos guerras mundiales, dictaduras y genocidios.

Entonces, el desafío radica en ver si el siglo XXI podrá abrirse como una centuria de paz. Hasta ahora, al menos, continuamos con los tambores de la guerra permanentemente. Pero, además, con circunstancias diferentes, porque tenemos conflictos bélicos de características distintas. Hoy se habla de guerra preventiva y se violan o directamente se soslayan las decisiones de las Naciones Unidas.

Entonces, ¿dónde está la nítida separación entre los tiempos de guerra y los tiempos de paz? Comparto algunos criterios que fueron planteados para el Anexo III que voy a desarrollar después, y me parece que el primer interrogante lo tenemos en el Anexo II, porque definir un procedimiento especial en tiempos de guerra implica desarrollar cuestiones y abrir rutas que estábamos de acuerdo como concepto general que, en democracia, deberían cerrarse, como todas las posibilidades de eliminar los derechos y garantías de los ciudadanos.

Pero con otra cuestión, que nos parece más fundamental todavía, porque el proyecto del Poder Ejecutivo, en el Anexo II, aprueba un procedimiento penal especial para el tiempo de guerra y otros conflictos armados. Y si bien es cierto que al inicio establece el principio general de que los delitos cometidos por militares en tiempos de guerra o en ocasión de otros conflictos armados serán investigados y juzgados según el régimen ordinario previsto para el tiempo de paz, en seguida se habilita un procedimiento especial cuando las dificultades provenientes de las condiciones de la guerra o de las operaciones iniciadas sean manifiestas e insuperables y la

demora en el juzgamiento pudiere ocasionar perjuicios en la eficiencia operativa o en la capacidad de combate.

Es decir que nuevamente por un lado afirmamos algo y, por el otro, entramos en un terreno muy farragoso, que contradecemos. Y nosotros creemos, desde el principio por eso nuestra adhesión en general, que la Justicia militar tiene que estar siempre en manos civiles; nunca en un Consejo de Guerra integrado por pares.

Ahora bien, con esto de los tiempos de guerra, también quiero mencionar algo que los socialistas planteamos desde hace décadas. Decía Alfredo Palacios, cuando interpelaba al ministro de Guerra en 1913, que la Justicia militar debe ser impartida por civiles y que esto es tanto más necesario tratándose de la Justicia en tiempos de guerra, ya que es precisamente allí, en medio de la confusión, del atropello y del desequilibrio general, cuando se necesitan hombres serenos, capaces de apreciar y de juzgar al abigo de errores que pueden ser irreparables; no obstante las rehabilitaciones póstumas.

El aspecto que mencionaba del Anexo III, con lo que tampoco estamos de acuerdo en particular nuestra votación será negativa se refiere a las instrucciones a la población civil para tiempos de guerra. En relación a esta cuestión, el proyecto del Poder Ejecutivo sancionado en la Cámara de Diputados establece la posibilidad de dictar instrucciones a la población civil. Y nosotros pensamos que bajo ninguna circunstancia la jurisdicción militar puede comprender a civiles sin equiparación militar, porque debemos detener claramente cualquier posibilidad futura de aplicación de la Justicia militar a civiles.

Tampoco estamos de acuerdo con la incorporación del artículo 187 bis del Código Procesal Penal, ya que en ciertos casos habilitaría aunque lo plantea de manera excepcional en el caso de conflicto armado la posibilidad de que la autoridad militar pueda detener a civiles que cometan ciertos delitos. Es decir que esta cuestión de directivas militares hacia civiles hace que pongamos especial atención en lo que muy bien desarrolló el señor senador Naidenoff para este Anexo III; y que comparto conceptualmente.

A su vez, quiero plantear nuestra diferencia de posición en lo que plantean los artículos 12 y 13, en el Capítulo III del Anexo IV, en los cuales se definen las faltas gravísimas. Creemos que está perfectamente delimitado que los delitos pasan a la Justicia ordinaria, por lo tanto, los comprendidos en el régimen disciplinario son los que tienen que abordar las distintas faltas.

Esto nos parece importante, porque se deben sancionar única y exclusivamente las infracciones y faltas que supongan hechos que cercenen o afecten estrictamente la disciplina militar.

Por último está el tema del artículo 28, inciso 5), que vuelve con un tema muy sensible para todos los argentinos, porque se refiere a la obediencia debida. Nos parece que, a pesar de que lo plantea en tiempos de guerra, desde 1984 la obediencia debida ciega fue eliminada y consideramos que debe desterrarse cualquier vestigio de lo que fue esa práctica nefasta.

Por estas razones y las consideraciones efectuadas, adelanto que no vamos a acompañar la votación en particular.

Vuelvo al principio, en cuanto a este paso dado con la derogación del Código de Justicia Militar y con la sanción de esta ley: la democracia argentina, las fuerzas armadas con su democratización, la Constitución Nacional, la abolición de la pena de muerte y la convivencia, son todos hechos que hacen fundamental la ley que hoy sancionaremos.

Sr. Marín. Pido la palabra.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Marín.

Sr. Marín. Señor presidente: simplemente quiero mencionar que no coincido con las objeciones realizadas por los colegas preopinantes. Y particularmente, porque si bien es cierto que algunas de las circunstancias que se mencionaron se manejan en un hilo muy fino, creemos que en última instancia el objetivo esencial que tienen estas modificaciones es la participación de la Justicia en todos los órdenes, incluso en casos de guerra, que es una situación especialísima, y en circunstancias en donde ha cambiado la óptica que podría tenerse antes sobre lo que puede ser la guerra ahora. Por lo menos desde mi óptica, creo que en la redacción de este Código no existe ninguna situación que limite o que perjudique a los civiles y, menos aún, quite autoridad al comandante o al jefe del lugar donde se produce el hecho bélico.

En el caso de las lesiones que podía plantear y a las que se refería el colega, son medidas para él disciplinarias. Nosotros creemos que esto tiene que figurar dentro del Código de fondo, es decir, del Código Penal, sobre todo en el Anexo III, en el artículo 10, referido al militar que pusiere manos en el superior. Consideramos que tiene las mismas relaciones que en

el caso de la autoridad jerárquica, como lo podría tener en el caso de un delito cometido por un funcionario público, en cuya circunstancia la pena es mayor.

En consecuencia, señor presidente, no vamos a coincidir con la modificación en la forma en que está redactada. Sin duda, podrá tener interpretaciones justificables, quizá más ideológicas que realmente de fondo, pero la nuestra es que la redacción dada reúne los requisitos que, a nuestro juicio, debe tener la nueva disposición en el Código de Justicia Militar.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Lores y luego las señoras senadoras Viudes y Perceval.

Sr. Lores. Señor presidente: haré una breve intervención para fundamentar y anticipar mi voto afirmativo al proyecto en consideración.

Quiero señalar tres o cuatro lineamientos que son el fundamento de la posición del bloque al que pertenezco, del Movimiento Popular Neuquino.

En primer lugar, digo que este proyecto ha sido ejemplo de una construcción ampliamente participativa sin que nadie haya quedado excluido de la posibilidad de manifestarse, de escuchar y de aprender debido a la cantidad de personalidades académicas, de juristas, de auditores de las fuerzas armadas presentes en la disertación del doctor Zaffaroni llevada a cabo en el seminario organizado por la senadora Perceval en su carácter de presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y que se desarrolló durante el mes de abril en el Senado de la Nación. Fue un seminario esclarecedor, donde todos tuvimos la oportunidad de preguntar, de participar y de quitarnos las dudas que podíamos tener con respecto a este importante proyecto de ley.

En segundo lugar, me parece importante señalar, más allá de todo lo que ya han expresado los señores senadores proponentes, que esta iniciativa tiene plena coherencia con la política de derechos humanos que se está llevando a cabo en la República Argentina desde la época del anterior gobierno y que continúa con el actual. Y también tiene coherencia con las normativas y con los estándares de derechos humanos establecidos en los foros internacionales para todo el personal que se desempeña en los ámbitos castrenses. Me parece fundamental señalar esta coherencia con esta política que se viene desarrollando y fortaleciendo en el país en los últimos años.

Creo que a partir de la sanción de esta ley todos los integrantes de las fuerzas armadas tendrán las mismas garantías legales y constitucionales que los restantes integrantes de la sociedad civil. Los miembros de las fuerzas armadas gozarán del principio de igualdad ante la ley.

Otra cosa que quiero destacar y que me parece que tiene un altísimo valor simbólico más que práctico, porque, como ya se ha dicho aquí, hace más de setenta años que no se aplica, es la abolición de la pena de muerte. Este es un hecho de un valor simbólico extraordinario, porque significa la revalorización de la dignidad de los seres humanos en un país que mayoritariamente se ha manifestado en defensa de la vida. Insisto: creo que más que nada tiene un valor simbólico y lo tenemos que destacar como uno de los aspectos más relevantes de esta reforma que estamos impulsando desde el Congreso de la Nación.

Finalmente, un aspecto que está englobado en lo que he dicho anteriormente pero que, según creo, también es necesario destacar, tiene que ver con el tema del capitán Correa Belisle, como se mencionó recientemente, y es el aspecto que tiende a eliminar todas las trabas para el ejercicio del legítimo derecho a la defensa que tienen hasta la fecha, hasta que se modifique la normativa legal, los miembros de las fuerzas armadas. A partir de esta sanción, todos podrán elegir su defensor de confianza y, además, van a ser juzgados por jueces letrados, con fiscales letrados, abogados, y con defensores con la misma formación. Esto significa un enorme paso adelante que el Congreso está impulsando y que tiende a un reordenamiento jurídico y, fundamentalmente, a una integración definitiva de las fuerzas armadas con la sociedad civil.

Sr. Presidente. Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. Señor presidente: como está previsto el cierre, quiero saber si se va a disponer de un momento para expresar algunas consideraciones sobre las observaciones en particular que hicieron los senadores proponentes. Entonces, le pido que después de que hable la senadora Viudes me permita hacer esas observaciones.

Sr. Presidente. Sí, cómo no.

Tiene la palabra la señora senadora Viudes.

Sra. Viudes. Señor presidente, señores senadores: en primer lugar, quiero decir que estoy honrada por la presencia de la señora ministra de Defensa en este recinto.

A su vez, como firmante del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales quiero decir que el proyecto que estamos tratando viene a derogar el actual Código de Justicia Militar, sancionado en 1951 en base a un proyecto elaborado por el entonces auditor de las fuerzas armadas Ricardo Sacheri. Es, en realidad, una copia del Código Bustillo vigente desde 1898 y cuya estructura fundamental se mantiene hasta hoy.

Las modificaciones del año 1951, según Sacheri, tenían como objeto la adecuación que el Código Bustillo necesitaba para ajustarse a la sanción del Código Penal en 1921 y a la Constitución vigente en ese momento, que fue sancionada en 1949. Pero, básicamente, nuestro código está inspirado en el sistema de justicia militar de los siglos XVIII y XIX, con toda la carga de anacronismo que nada tiene que ver con la concepción moderna de la guerra, de las fuerzas armadas democráticas y de un estado de derecho consolidado.

¿Por qué es necesaria la derogación del Código de Justicia Militar y ordinarizar los delitos militares? En primer lugar, porque el caudal de causas que llega a la justicia militar por año es tan escaso que no justifica el mantenimiento de un foro propio. Pero más importante que eso es porque nuestro país asumió el compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de adecuar nuestra legislación a los sistemas internacionales. Y si para ello es necesaria una modificación, hacerla es nuestra tarea como legisladores nacionales.

Por un lado, el actual código no satisface la garantía de defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, pues los artículos 96 y 97 del Código de Justicia Militar impiden a quienes sean juzgados elegir a un abogado de su confianza. Por ello, la jurisdicción militar no es ningún privilegio para quienes están sometidos a ella, como lo remarcó con énfasis el ministro de la Corte Suprema doctor Raúl Zaffaroni, ya que el militar argentino en tiempos de paz tiene menos derechos que el prisionero de guerra en tiempos de guerra, por cuanto este último en tiempos de guerra tiene derecho a la elección de un abogado para su defensa, derecho que sí tiene el prisionero de guerra y no tiene el prisionero militar común.

Mediante la reforma que hoy impulsamos se elimina definitivamente la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico argentino. Actualmente, es el único lugar de la legislación argentina donde está vigente la pena de muerte. Es, precisamente, en este Código que hoy pretendemos derogar que se prevé como sanción en más de cincuenta casos. Todos sabemos que el artículo 4º, inciso 3), de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la cual nos adherimos por ley 23054 y luego incorporamos como parte integrante de la Constitución Nacional a través de la reforma de 1994, establece que todos los estados parte que prevean la pena de muerte deben eliminarla de sus ordenamientos y los que no la tengan no podrán incorporarla. De este modo, con el fin de eliminación, ya no podrá ser nunca más restablecida, respetando siempre, por supuesto, el orden legal.

Otra cuestión es que los tribunales militares están compuestos por funcionarios que dependen jerárquicamente del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, a criterio de aquellos que somos defensores de la Constitución, estos tribunales son inconstitucionales, pues violan abiertamente la norma que prohíbe al Ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales; o sea, la división de los poderes.

Si el artículo 109 de la Constitución Nacional establece que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, está claro que si el presidente carece de tal competencia y no tiene jurisdicción penal tampoco pueden tenerla sus subordinados. Por consiguiente, los actuales tribunales militares no pueden considerarse jurisdicción en sentido constitucional ni internacional y constituyen tribunales administrativos incompetentes para aplicar leyes penales. Un tribunal administrativo sólo puede aplicar una sanción administrativa, pero en este caso están autorizados a aplicar la pena más grave de todas las penas conocidas en los órdenes jurídicos penales del mundo: la pena de muerte.

En el mantenimiento de esta cuestión debemos considerar también los planteos hechos ante los tribunales internacionales y ante nuestra Corte Suprema de Justicia. En el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestro país tiene dos denuncias o dos casos como decimos los abogados en los cuales se ha obligado a modificar su sistema de justicia militar. Se trata de los casos *Rodolfo Correa Belisle vs. Argentina* y *Argüelles y otros vs. Argentina*. En estos casos el Estado nacional fue denunciado y se ha iniciado una serie de negociaciones a partir de las cuales uno de los compromisos de la Argentina ha sido llevar adelante una reforma integral del sistema de justicia penal militar que esté en un todo de acuerdo con los estándares internacionales vigentes en la materia.

Por otro lado, en la causa *López, Ramón* nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de una sentencia de la justicia militar por no adecuarse dicho

pronunciamiento judicial a los estándares de derechos humanos vigentes en el país y por considerar que no se satisface la exigencia de un tribunal independiente, dado que quien juzga es una instancia administrativa designada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni las garantías de defensa en juicio artículo 18 de la Constitución Nacional, pues, como dije, se restringe la elección de un abogado defensor. Por consiguiente, los actuales tribunales militares no pueden considerarse jurisdicción en sentido constitucional ni internacional.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo lugar al recurso extraordinario, dijo que toda persona sometida a la jurisdicción castrense goza de los derechos fundamentales reconocidos a todos los habitantes de la Nación, de los cuales no pueden ser privados Fallos 54:577 y 310:1797. Cabe entonces dotar de contenido a este principio para que tenga efectiva vigencia y no sea una mera fórmula verbal. Así votaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Zaffaroni y Lorenzetti. Esto es lo que pretende hacer el presente proyecto del Poder Ejecutivo Nacional: que se reconozca jurídicamente que los integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación son ciudadanos con los mismos derechos que la Constitución Nacional establece para los demás ciudadanos.

El proyecto en consideración tiene nueve artículos y cinco anexos; el Anexo I establece modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal de la Nación. Muy brevemente, quiero destacar que las modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación son atinentes a los temas de jurisdicción y de competencia; se elimina toda referencia a la competencia y a la jurisdicción militar y los colocan en el seno de tribunales federales; se separa el régimen de disciplina creando un sistema de juzgamiento diferente, taxativo, incluyendo tres categorías de faltas: leve, grave y gravísima, y también creando instancias particulares para cada fuerza y un sistema jurídico conjunto. Lo más importante es que garantiza la defensa en juicio y el debido proceso, que es también la parte más sustancial en lo que se refiere a procedimiento, dado que en la actualidad en muchos casos se limitan algunos derechos y en ciertas ocasiones se niegan los derechos más elementales como, por ejemplo, el de defensa.

En cuanto a las disposiciones penales que se modifican, en algunos casos traen delitos militares al seno de nuestro Código Penal y en otros se establecen disposiciones específicas que agravan la pena cuando los delitos comunes a todos los ciudadanos sean cometidos por militares. En ese sentido, se modifica el artículo 77 de la parte general del Código Penal incorporando una definición de lo que se entiende por personal militar. Tal precisión es absolutamente necesaria porque en ese artículo se enuncian distintas definiciones que luego son tenidas en cuenta en la parte especial.

En lo referido a los delitos de la parte especial, se introducen modificaciones en el homicidio calificado, en la privación de libertad, en la instigación a cometer delitos, en la traición a la patria, en aquellos delitos que competen a la paz y a la seguridad de la Nación, en la resistencia a la autoridad, en la usurpación de autoridad, en el abuso de autoridad y en la violación de los deberes de funcionario público.

Los artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal de la Nación, cuya modificación se propicia, adecuan nuestra norma de fondo y de forma para que el juzgamiento de los delitos cometidos por militares sea plenamente ejercido por la jurisdicción de nuestros jueces federales.

El Anexo II se corresponde con el establecimiento de un procedimiento penal militar para tiempos de guerra y otros conflictos armados.

El Anexo III contiene instrucciones para la población civil para tiempos de guerra y otros conflictos armados, y las facultades que tienen los miembros de las fuerzas armadas respecto de la población civil en el marco de esas instrucciones.

El Anexo IV establece el código de disciplina para las fuerzas armadas. Se procura mantener la verticalidad y la disciplina, pero también el derecho de defensa de quien está sometido a un proceso disciplinario.

El Anexo V se refiere a la creación del Servicio de Justicia Conjunta de las Fuerzas Armadas que, reitero, es absolutamente respetuoso de las garantías constitucionales.

Por lo tanto, considero que el proyecto en examen representa un gran paso en materia de calidad institucional, algo muchas veces repetido por quien fuera hasta el 10 de diciembre nuestra par y hoy es la presidenta de todos los argentinos; es decir, la calidad institucional.

Con esta iniciativa estamos cumpliendo con dos compromisos uno de carácter internacional y otro interno que se asumieron con el advenimiento de la democracia. En lo interno, no sólo estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución Nacional, sino que

también estamos dando respuesta a un reclamo vigente desde 1983, cuando desde esta Cámara y desde diversos organismos se planteó la necesidad de eliminar definitivamente la pena de muerte.

En consecuencia, con este proyecto se moderniza la legislación, poniendo fin a un código obsoleto tal como se dijo aquí que tiene más de un siglo, y sus principios más de dos siglos. Es decir que existía la necesidad imperiosa de reformarlo.

Esa necesidad fue vista por el Poder Ejecutivo, que trabajó con todas las partes implicadas en el proceso. Más aún, en ambas cámaras trabajó el Poder Ejecutivo en forma integral a través del Ministerio de Defensa. Es por ello que felicito a la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional por el seminario realizado en este Senado, en el cual destacados juristas disertaron y nos esclarecieron todas las partes de este Código.

En materia internacional, los representantes de la Comisión Americana de Derechos Humanos que nos visitaron expresaron que con este proyecto no sólo vamos a igualar los estándares internacionales, sino que además servirá de modelo de modernización para otras legislaciones.

No podemos olvidarnos de que la reforma de 1994 incorporó con jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos, que estamos obligados a cumplir en función del imperativo de la Constitución y de los compromisos que hemos asumido como país.

Por los motivos expuestos, celebro que hoy estemos derogando el actual Código de Justicia Militar.

Sr. Presidente. Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. Señor presidente: voy a tomar los criterios comunes que se plantearon como observaciones, los que también fueron motivo de preocupación de la Comisión de Defensa Nacional cuando se trabajó en los plenarios de comisiones.

Con respecto a la ley 23049, que incorpora lo relativo a obediencia debida bajo la figura de obediencia ciega, recordemos que se dice que el artículo 34, inciso 5), del Código Penal deberá ser interpretado conforme a la regla del artículo 514 del Código de Justicia Militar respecto de los hechos cometidos por el personal mencionado en el artículo anterior que actuó sin capacidad decisoria cumpliendo órdenes o directivas que correspondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar. A ese efecto podrá presumir, salvo evidencia en contrario, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o aberrantes. Es decir, que esta figura de obediencia debida o de obediencia ciega se refiere, en las modificaciones que se inician con la ley 23049, a lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad.

A pesar de la ley 23049, no debemos olvidarnos de que la ley de obediencia debida que se sancionó después dice en su artículo 1º que se presume, sin admitir prueba en contrario, que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10, inciso 1), de la ley 23049 por haber obrado en virtud de obediencia debida.

De allí que creo que esto se zanja y se aclara perfectamente con el fallo Simón del año 2005 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando el 14 de junio declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final, 23492, y de Obediencia Debida, 23521, sancionadas en el año 1987. Este Congreso también se expresó sobre la nulidad de esas leyes.

En línea con el texto del proyecto que hoy analizamos, el artículo 34 del Código Penal, bajo el título de imputabilidad es lo que decía el senador Petcoff Naidenoff dice que no es punible el que obrare en virtud de obediencia debida inciso 5). Consecuentemente, en términos de dogmática penal, la obediencia debida está prevista como eximente. La fórmula legal responde a una larga tradición legislativa mucho más cercana, según la interpretación, a la tradición inglesa que a la francesa.

Entonces, hay que tener presente también que en la letra del proyecto el tema de la obediencia es falta gravísima si se cumplen órdenes que van contra la legalidad, contra la Constitución, etcétera.

En otro orden de cosas, debe señalarse que el exceso en el cumplimiento de órdenes a que se refiere el último párrafo del artículo 514 del Código de Justicia Militar que tratamos encuentra sanción adecuada en el texto del artículo 35 del Código Penal.

Un comentario relativo al tema del conflicto armado, anexo 3. Por un lado, me voy a referir a la ley de defensa nacional. Recién comentaban que la ley de defensa nacional tiene distintas expresiones sobre ese tema. En la Argentina, en nuestra legislación, no se entiende guerra sino como una situación de hostilidad de un enemigo a nuestro territorio soberano, a nuestra Nación, con lo cual doctrinas busheanas u otro tipo de doctrinas son sólo eso, pero la definición de guerra la tenemos claramente normatizada y definida.

Paso al tema de los conflictos armados, que le preocupaba a los senadores Petcoff Naidenoff y Giustiniani y también a nosotros. En la ley de defensa nacional 23554, que se reglamentó hace muy poco tiempo, precisamente durante la gestión de la ministra que hoy nos acompaña, recién a partir del Título VI, Organización Territorial y Movilización, comienza a hablarse de conflicto armado internacional.

El artículo 28 de la Ley de Defensa alude a conflicto armado internacional y el artículo 30 alude a conflicto armado de carácter internacional. Pero antes de ello, la Ley de Defensa Nacional se refiere a conflicto, conflicto armado, hipótesis de conflicto, hipótesis de guerra, guerra y agresión externa. Los remito a los artículos 2, 3, 5, 12 y 18 de la Ley de Defensa Nacional. ¿Quiero decir con esto que es ambigua la ley? No; quiero decir que no sólo se hace referencia a conflicto armado internacional, sino, tal como se ha referenciado, a otros términos de hechos bélicos y de guerra. Relaciono esto con la preocupación sobre el ámbito de discrecionalidad militar que se advirtió en el Anexo III con el tema de las instrucciones a la población civil para tiempos de guerra y otros conflictos armados.

Para tener certeza sobre este asunto, solicitamos a la Cruz Roja Internacional que, en el marco de la comisión convocada por la señora ministra, se encargara específicamente del tema, ya que se encuentra a la luz de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales y bajo los principios, valores y reglas mínimas de dicha organización. Si nos remitimos a las definiciones que surgen de los documentos de la Cruz Roja Internacional, retomados por los convenios de Ginebra y por los protocolos adicionales, hay una distinción de conflictos armados de carácter internacional y de naturaleza interna. Es decir, conflicto armado internacional es aquel en el que, por lo menos, intervienen dos Estados; conflictos no internacionales internos es sinónimo de guerra civil, enfrentamiento entre fuerzas armadas de un Estado o fuerzas armadas disidentes o rebeldes, y tiene lugar en el territorio de un solo Estado. En estos casos, se aplica el artículo 3° de los convenios de Ginebra y el Protocolo II. El artículo 3° de los convenios de Ginebra hace específicamente referencia a los conflictos armados que no sean de índole internacional.

En el seminario realizado en el Senado agradezco la ponderación efectuada por los colegas, hubo un planteo del doctor Rosendo Fraga en el sentido de que podría argumentarse una mayor precisión sobre estos temas. Sin embargo, según lo consultado con Gabriel Valladares, asesor jurídico de la Cruz Roja Internacional, cuando en el texto de la norma se alude a "otros conflictos armados" sería suficiente englobar, en el marco de la definición de los convenios de Ginebra, conflictos armados no internacionales, lo cual no produce confusión alguna entre seguridad interior y defensa. Precisamente, si en algo tenemos garantía con la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, es que se ha demarcado, clara y firmemente, la distinción, las funciones, los organismos y los procedimientos de seguridad interior y de defensa.

Sr. Presidente. Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. Señor presidente: quiero ser muy escueta. Acompañaré con mi voto el proyecto en consideración, salvo los anexos II y III, y puntualmente quiero aludir a una cuestión muy específica.

Indudablemente, como lo dijo el miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que, además, hizo un relevamiento detallado de cuáles son los fallos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que hay un consenso generalizado sobre la necesidad de la reforma.

Como dije, no quiero hablar en general del tema, porque fue excelentemente abordado por los senadores preopinantes. Mi intención es recalcar lo valioso de la derogación del artículo 668 bis. ¿Por qué digo esto? Con el advenimiento de la democracia, yo me encontraba ejerciendo la profesión y vino a verme un vecino suboficial de la Fuerza Aérea y Testigo de Jehová. Desesperado, me dijo que recibió una notificación por la cual se lo dejaba afuera de la Fuerza Aérea. Entonces, me contó un poco la historia de lo que había pasado.

Resulta que este vecino estaba retirado por un problema cardíaco muy importante; o sea, se había retirado anticipadamente. Lo habían convocado, pero en el marco de una reunión en la

V Brigada Aérea en Villa Reynolds, ubicada en la provincia de San Luis, le dijeron que se habían enterado de que andaba por los domicilios repartiendo folletos y haciendo propaganda religiosa, razón por la cual debía renunciar inmediatamente si no quería recibir sanciones mayores. Luego, llamaron a un auditor. Este vecino preguntó si su familia se iba a quedar sin nada, todo ello sumado a otras situaciones de extrema violencia psíquica. Le dijeron que no; que su esposa iba a tener la pensión. Lo cierto es que tuvo que renunciar, debido según le dijeron a que era Testigo de Jehová.

Por eso, cuando me vino a ver, iniciamos un largo camino. Primero, por la vía administrativa, en la cual no tuvimos nunca acogida. Allí siempre nos dijeron que no había una definición definitiva en el Comando Superior. Después, recorrimos el camino judicial en el marco del cual pedimos la nulidad. Allí acompañamos actas de testigos muy mayores que se nos estaban por morir, pero que habían estado cuando esta persona fue presionada a renunciar porque era Testigo de Jehová. Finalmente, le embargaron la casa porque le pedían la devolución de los ocho o diez años que había percibido sin tener tal derecho. Así, lo dejaron absolutamente sin nada. Lo único que tenía era su vivienda y un autito, que creo que alcanzó a vender antes de ser embargado. Cuando se le acabó la plata de la venta del auto quedó en la miseria. Hace poco falleció, pero acogido por el plan "Trabajo por San Luis" para los que no tienen nada; y este hombre estaba condecorado. En fin, recuerdo que hice denuncias en dos o tres oportunidades ante el INADI; sin embargo, nunca logró que me contestaran. Recorrimos recorrió él, porque venía a Buenos Aires muy seguido y golpeamos ante cuanta puerta había; pero nunca consiguió un reconocimiento.

Quiero señalar que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se ha pronunciado señalando que, luego del decreto de facto 1867, la dictadura de Videla incorporó al Código de Justicia Militar el artículo 668 bis por ley de facto 21.528 del 7 de diciembre de 1977. El fundamento de tal norma reside en la necesidad de reprimir ciertas actitudes de rebeldía por parte de ciudadanos que se niegan al cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 17531, invocando motivos confesionales o pertenecer a sectas pseudoreligiosas, tales como los Testigos de Jehová, Lectores de la Biblia, etcétera. Entonces, realmente, es necesario resaltar que constituye un acto de justicia la derogación del artículo 668 bis y, además, la incorporación en la sanción de la prohibición de sancionar por diferencias religiosas o políticas.

A su vez, el Anexo IV, artículo 4º, se vincula con sancionar ideas o creencias políticas, religiosas o morales. Si bien la no discriminación y la prohibición de discriminar está en nuestra Constitución, en el Código de Justicia Militar, el 668 bis implicaba que aquellos que no tuvieran la religión católica no podían permanecer en las filas de las Fuerzas Armadas. Este capítulo, que estaba bajo el nombre de Insubordinación, hoy ha quedado con una simple referencia de apenas un renglón y medio, al cual ya han hecho referencia acá. Por esto quería hablar; porque durante mucho tiempo, y sin ser legisladora, dialogué con varios legisladores sobre la necesidad de derogar ese artículo.

Hace muy poquitos años, vi morir a mi vecino, acogido por un plan para personas que no pueden trabajar y no era un indigente, sino mi vecino; por un plan para personas sin trabajo; por el plan de inclusión social que tiene la provincia, llamado Trabajo por San Luis, que fue instrumentado para, desde el punto de vista de los derechos humanos, acoger a aquellos que no pueden trabajar. Lo cierto es que cuando vi morir de esa forma a esta persona que había sido condecorada por la Fuerza Aérea Argentina, pensé que algún día llegaría el momento de una reivindicación tanto para él que ya no podrá tener como para su familia, que, indudablemente, sufrió por este tema. El viernes, cuando vuelva a San Luis, voy a ir a ver a su esposa, que está muy deteriorada psíquicamente por lo que ha pasado, y le voy a decir que finalmente, el 668 bis, por el que tanta tinta derramamos ante los juzgados federales en busca de una reivindicación para este hombre y que tantas veces consignamos en nuestros escritos judiciales, no existe más por el bien de todos los ciudadanos de nuestra querida República Argentina.

Sr. Presidente. Se van a votar los pedidos de inserciones.

Se practica la votación.

Sr. Presidente. Se aprueban.¹¹

¹¹Ver el Apéndice.

Sra. Perceval. Pido la palabra.

Sr. Presidente. Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. Primero, quiero agradecer a la señora ministra de Defensa y a la comisión redactora de este proyecto.

Más allá de que distintos expositores se han referido a las ordenanzas militares de España y a la primera codificación de Derecho Penal y Procesal Militar de 1894, creo que es necesario poner en valor el avance que se hace, no solamente con la derogación del Código de Justicia obsoleto, anacrónico y disfuncional vigente. Lo cierto es que teniendo en cuenta que hay distintos modos de construir un sistema de Justicia militar y que nosotros podemos encontrar que este modelo argentino está inspirado en el alemán, cada uno de los componentes que aparecen como anexos hablan de la integralidad que tiene un sistema de Justicia militar. Justamente por esto, podemos decir que se trata de un proyecto que no solamente deroga el viejo código, sino que crea un nuevo sistema integral de Justicia militar en el marco de la definición de las políticas de defensa.

Ya habían intentado hacerlo Las Heras y los presidentes Sarmiento y Nicolás Avellaneda; también, Lucio V. Mansilla, siendo presidente Roca, y Carlos Pellegrini. Todos ellos no habían tenido ninguna chance favorable de que el Parlamento tratara estos proyectos y de que se pudiera modificar el Código de Justicia Militar conocido como Código Bustillo. Es cierto que, siendo presidente Perón, en 1950, se había hablado de una modificación del Código de Justicia Militar en el marco de la nueva Constitución del 49, pero, finalmente, en el Parlamento se trataron dos artículos. Uno de ellos tenía que ver con una actualización merecida, porque en los consejos de guerra no estaba la Fuerza Aérea. Claro, es cierto: el código todavía tenía la rémora de que los aviones no existían. Entonces, se constituye el Consejo con dos representantes de la Fuerza Aérea, dos por la Armada y dos por el Ejército.

Ahora bien, ustedes recordarán una cuestión que resultó realmente contradictoria. Durante la gestión de Hipólito Yrigoyen, se había modificado el Código Penal, desequilibrándose los delitos y las sanciones. En consecuencia, más allá de los delitos esencialmente militares, en algunos casos, aparecían sanciones más graves para los civiles que para los militares. Por lo tanto, el criterio del artículo modificado por la ley aprobada durante la presidencia del general Perón y expuesta por el senador Antille en el Senado establece que nunca podrá ser menor o menos grave la sanción a un militar por igual delito cometido. Desde entonces, hubo que esperar como dijo el senador Naidenoff hasta 1984.

Es cierto que se hicieron modificaciones muy importantes. Es cierto que el doctor Alfonsín, a tres días de haber asumido, envió al Parlamento el proyecto de modificación al Código de Justicia Militar; también, que el contexto histórico e institucional del momento no permitió avanzar en todo aquello que el ex presidente había planteado. Sólo basta con recordar los hechos de Semana Santa. No obstante, hubo un avance claro y definitivo en términos de que las prescripciones particulares sobre el juzgamiento de delitos imputados a personal militar de seguridad y policial que actuaron bajo obediencia debida comienzan a tener tratamiento más allá de las fatídicas leyes de obediencia debida y punto final. También es fundamental señalar que deroga dos normas de facto que se habían incluido en el Código de Justicia Militar. Podemos mencionar la ley 21.267, que otorga a las fuerzas militares facultades de fuerzas de seguridad.

Quienes estuvieron en el seminario, recordarán que hubo un importante cambio mencionado por el coronel Lozano, quien indicó que, después, en la práctica, se había convertido en una disfuncionalidad. En efecto, en la modificación realizada durante el gobierno de Alfonsín, se corrige el exceso de competencia de la Justicia militar y se cuestiona la no revisión de las sentencias en la Justicia ordinaria. Pero ¿qué pasó? El exceso de competencia de la Justicia militar consistía en incluir los delitos comunes cometidos por personal militar en jurisdicción militar o en actos de servicio. En realidad, la ley 23.049 deja los delitos esencialmente militares en el Código de Justicia Militar y pasa los otros al Código Civil. ¿Dónde estuvo la disfuncionalidad? En que, en realidad, cada Cámara Federal del país era tribunal de alzada de los distintos consejos de guerra que funcionaban en la Justicia militar; y podía ser tribunal de alzada en el caso de los delitos, no de las sanciones. Entonces, la disfuncionalidad empírica consistió en que había tantos criterios aplicables como Cámaras existían. Por eso, en 1992, con la sanción del Código Procesal Penal de la Nación, se otorgó la competencia militar de revisión con exclusividad a la Cámara de Casación Penal.

En 1894, en el debate dado en este recinto, el parlamentario radical Barroetaveña que realmente dio un muy buen debate, siendo quien puso el criterio de institucionalidad y democracia cuando el peronismo no existía decía que los delitos comunes que se cometían dentro de las fortalezas, fortines o lugares dominados por fuerzas militares debían corresponder a los tribunales militares. Sin duda, se incurre en un grave error: si el delito es común fuera de los cuarteles, también lo es dentro de los cuarteles. Esto se decía en 1894 y recién se pudo modificar en 1984. Y se pudo modificar en 1984. De allí una cuestión interesante es que la revisión a la que habilita la ley Alfonsín — así la llamaremos — es una revisión limitada y deja como definitiva la apreciación de los hechos que hacen los consejos de justicia militar. Es decir que toda la parte de la instrucción — y sabemos, como decía el senador Marín, que no cumple con ninguna de las garantías del debido proceso —, la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho que, en la etapa de instrucción, ha hecho el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, no se revisa. Entonces, teníamos con un avance pero, al mismo tiempo, con una restricción.

Un aspecto no menor, que conocí gracias al senador Giustiniani, es una ley que se sancionó en 1998, que tiene especial significación para las amigas senadoras. En el Capítulo II del Código de Justicia Militar, en el artículo 259, en lo que se refería a citación — esto tenía que ver con la disciplina — se decía que estaban obligados a declarar pero no estaban obligados a concurrir a la citación: 1) las personas enfermas o físicamente imposibilitadas y las mujeres de vida públicamente honesta. Este anacronismo de la legislación castrense, más allá de considerar a la mujer aquejada de una *capitis diminutio* civil, suponía que si un juez de instrucción militar citaba a una mujer a declarar, ella estaba relevada de la obligación de declarar si era una mujer de vida públicamente honesta. ¿Y las deshonestas? O bien nunca serían citadas a declarar o, si se las citaba, no tenían la posibilidad de negarse a concurrir a los cuarteles.

En el artículo 264 del Capítulo III, referido al examen de testigo — y éstas no son notas de color, son modos de construir la democracia —, dice que nadie podrá asistir, es decir, auxiliar, ayudar en las declaraciones al que va a declarar, excepto cuando: 1) el testigo sea ciego o no sepa leer ni escribir, 2) cuando el testigo ignore el idioma nacional, o sea sordo, mudo, o sordomudo, y 3) cuando sea mujer. No obstante estas modificaciones en las que se avanza en este período de recuperación democrática, el Código de Justicia Militar siguió vigente en lo fundamental por el hecho de que el juzgamiento de los delitos militares continuó en manos del personal militar en todas sus fases, incluyendo la defensa. Es decir, al mantenerse la vigencia del Código de Justicia Militar Bustillo — diremos —, sus órganos y sus procedimientos, la cultura institucional y la arquitectura funcional de un sistema inquisitivo permanecen intactas.

Decía — y acá lo voy a nombrar a mi querido amigo el senador Sanz, porque fue un mendocino el que dijo eso en el debate de 1894 — Juan Agustín Álvarez, que éste desdoblamiento de derechos que hacemos para los militares es una necesidad del oficio, una necesidad de la sociedad; indudablemente será monstruosa esta desigualdad, pero es una desigualdad que existe en la naturaleza de las cosas, que no podemos hacer desaparecer. Dicho esto, senadora Troadello, en una sesión de noviembre de 1894. Es decir, desde 1894, lo que sostenían con total contundencia no se podía cambiar y la situación de desigualdad se tornó absolutamente inconstitucional, sobre todo, a partir de la reforma de 1994.

Pero el diputado Barroetaveña le contestó a Juan Agustín Álvarez, como si hoy estuviéramos contestando, en el debate que hemos tenido en la Comisión y que ha tenido la ministra. ¿Qué dijo Barroetaveña cuando habló a Juan Agustín Álvarez de la naturaleza de las cosas y la desigualdad natural del militar por ser militar? Las garantías, señor diputado — le dice —, no deben ser ilusorias, tanto más cuanto que ellas no se han establecido a favor de unos exclusivamente, sino para todos los que habitan el suelo de la República. El militar por ser tal no pierde su carácter de ciudadano. Sería original que precisamente al Ejército, encargado de cuidar la integridad del territorio y el imperio de la Constitución, ésta lo hubiera privado de sus garantías, convirtiéndolo en una clase tiranizada por leyes oscuras y draconianas.

Realmente, si nosotros lo miramos a la luz del actual artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, clave para el sistema de enjuiciamiento criminal, en tanto estructura y vertebra las garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos sometidos a proceso penal, realmente ese artículo 18, además de afirmar el principio de legalidad sustancial, establece las garantías del juez imparcial, la prohibición de autoinculparse, la garantía de la inviolabilidad de la defensa en

juicio y del debido proceso penal que, tal como explicó el senador Marín, de esto nada tienen hoy nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas.

Sr. Presidente. Senadora Perceval, el senador Jenefes le pide una interrupción.

Sra. Perceval. Cómo no, señor senador.

Sr. Jenefes. Quería contar una anécdota.

En 1973 me recibía de abogado. Tenía la prórroga de servicio militar y me incorporaron como abogado auditor, destinándome al Consejo de Guerra que funcionaba en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí me tuvieron haciendo sumarios por extravío de pistolas, de balas, cuestiones insignificantes. Y un día me dieron un caso importante de un soldado jujeño que había desertado. Yo estaba contento por ver si podía ejercer el derecho de defensa. Me dijeron que no me preocupara, que no me esmerara mucho porque ya había sido condenado.

Sra. Perceval. Gracias por su aporte.

Esto realmente ratifica no solamente la reforma constitucional de 1994, el valor del artículo 18, la incorporación de los diversos tratados e instrumentos de derecho internacional en el artículo 75, inciso 22). No son simples retóricas voluntaristas sino que libremente, soberanamente el Estado argentino asumió estas responsabilidades y obligaciones y decidió hacerlas efectivas en todas sus instancias. ¿Por qué no en la militar? ¿Cómo no en la militar?

También es bueno recordar que en este Senado votamos la Ley 26200, del Estatuto de Roma y su ley de implementación que también trajo claridad sobre lo que se llamaban antes delitos esencialmente militares. Se ha hecho un gran avance en ese Estatuto respecto de la tipificación de los crímenes y delitos de genocidios, crímenes de guerra y lesa humanidad y los delitos contra la administración de justicia. Creo que fue un gran avance tener esta legislación en nuestro país.

El senador Marín habló del derecho al debido proceso. Indudablemente lo encontramos en la Constitución, en convenciones, pactos y declaraciones de la jurisdicción interamericana y universal o internacional. Pero fíjense que ya en esa sesión de 1894 se cuestionaba por qué le iban a dar funciones judiciales al Poder Ejecutivo, lo cual violentaba en esta Argentina que estaba en su proceso de organización nacional y de su consolidación republicana. Comenzaba con estas fallas y utilizando a las fuerzas armadas para esa situación que también en ese momento creaba una cuestión de contradicción y oposición a la Constitución y a las leyes.

Al respecto, la señora ministra de Defensa lo ha comentado y lo hemos charlado; la garantía de imparcialidad tal como lo define la Corte Interamericana de Derechos Humanos es subjetiva y objetiva. Es decir, no es solamente imparcialidad objetiva. En este punto, en el caso *Herrera Ulloa vs. Costa Rica* está ampliamente descripto. En ese sentido cabe preguntarse cómo aquellos esto se lo preguntaba Lucio V. Mansilla que han de fallar no con arreglo a los dictados de la justicia sino según sus superiores jerárquicos quieran o no condenar, pueden ser efectivamente jueces imparciales. Es muy difícil pensarlo y en esta situación, planteada por Mansilla y denunciada en el recinto por Barroetaveña, seguimos hasta este momento con la no imparcialidad de los jueces.

Un tema que ha sido motivo de discusión también es esta etapa del Senado fue la competencia de la jurisdicción penal militar. Tanto en el informe de Naciones Unidas de 2001 como en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1993 la recomendación que se hace es que la Justicia Penal Militar debe tender a reducirse e incluso a desaparecer. Esto es consecuente con el fallo *López*, que todos nombraron, de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde el Código de Justicia Militar deviene absolutamente inconstitucional. El voto de Zaffaroni y Lorenzetti termina diciendo que toda persona sometida a la jurisdicción castrense goza de los derechos fundamentales reconocidos a todos los habitantes de la Nación, de los cuales no puede ser privado. Cabe entonces dotar de contenido este principio para que tenga efectiva vigencia y no sea una mera fórmula verbal. Aquí se habló de pena de muerte, que es realmente una rémora inadmisibles.

Para terminar, éste código no es anacrónico y hostil sólo en términos constitucionales, sino que también no sirve ni se adapta a la profesión militar del siglo XXI. El código vigente se redactó cuando los elementos de combate eran la infantería, la caballería y la artillería; cuando los barcos eran a vapor y no había aviones; cuando las comunicaciones se hacían mediante mensajeros a caballo; y cuando las batallas se decidían en base al número de efectivos que quedaba en pie. Sin embargo, los principales elementos de combate no resisten esta descripción:

la electrónica, la robótica, el software, los tanques, los aviones, los submarinos y los misiles; la comunicación se realiza vía satélite, las armas son inteligentes y la decisión de los conflictos depende directamente de la tecnología de los sistemas de armas y del entrenamiento de los recursos humanos.

Fíjense que éste código habla de guerra como frente de combate. Es decir, habla del combate tradicional en formación de grandes unidades con bayoneta y carga a caballo en donde nueve de cada diez muertos era militar. Como decía el senador Giustiniani, hoy nueve de cada diez muertos en conflictos armados son civiles, más allá de la sofisticación y los cambios en la estrategia y táctica de la guerra.

Finalmente, si usted tiene que ir a declarar y es un hombre o una mujer de las fuerzas armadas, por el artículo 280 del código actual, tiene que decir si reconoce al que va a acusar de algún maltrato. Por ejemplo, lo puede tocar con la mano si es de igual rango o inferior, pero lo tiene que señalar de lejos con el dedo si es superior.

Es decir, sin desmerecer los avances realizados a través de estos cien años, tal como dijo el auditor del Ministerio de Defensa de España, Bruno Otero Deus cuando vio el Código que teníamos vigente: Pues hombre, la justicia militar no es más palo y tente tieso; se trata de una justicia constitucional y democrática.

Creo que con este nuevo sistema de justicia militar nos ponemos a la vanguardia de América latina. Y los países de Latinoamérica, a partir de la sanción de este proyecto, seguirán el camino de la Argentina. Y eso, tal como decía el senador Marín, significa que todos los ciudadanos somos iguales en este país; una negación que se les hacía a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas.

Eso es calidad institucional; y eso es construir democracia y Estado de derecho.

Finalizaré con una frase de Barroetaveña de 1894: Por todo esto dijo en este recinto, amando al ejército de mi patria, deseándolo poderoso; pero un ejército de democracia, con hombres libres, con tribunales que apliquen verdadera justicia, con una codificación militar que se encuadre dentro de la Constitución.

Por todo esto, solicito la aprobación del nuevo sistema de justicia militar.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. Señor presidente: es a los efectos de plantear el sistema de votación que se adoptará.

Indudablemente, nuestra propuesta es votar el proyecto mediante una sola votación. Lógicamente, como en particular puede haber algún planteo de los bloques, en primer lugar los senadores tendrían que exponer los puntos con los que no están de acuerdo y, posteriormente, pasaríamos a la votación.

Sr. Presidente. Una sugerencia: de los once artículos, hay observaciones en los artículos 2°; 3°; 4° y 5°.

Sr. Petcoff Naidenoff. Pido la palabra.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. Señor presidente: nosotros no acompañamos el artículo 4°; el artículo 10° del Anexo I; y el Anexo III en su totalidad.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. ¿Hay algún otro senador que quiera plantear sus observaciones?

Sr. Presidente. Sí, el senador Giustiniani.

Sr. Pichetto. Entonces, que haga la manifestación, que quede registrada, y después procedemos a votar en una sola votación.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. Señor presidente: es a los efectos de expresar el sentido de mi voto.

Acompaño en general el proyecto. Y votaré en contra el Anexo II en particular su artículo 2° y el Anexo III.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. Señor presidente: en nombre del Bloque de la Coalición Cívica de la senadora Estenssoro, del Bloque del ARI de los senadores Díaz y Martínez José y en el mío, tal como dije en mi exposición, adelanto que acompañaremos el proyecto en general. Y que votaremos por la negativa el artículo 10 del Anexo I; la totalidad de los anexos II y III; del

Anexo IV no acompañaremos los artículos 12 y 13 del Capítulo III; y el inciso 5) del artículo 28 del Capítulo V.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. Señor presidente: aclaro nuevamente que el bloque de la Unión Cívica Radical acompaña en general. No acompaña el artículo 4º ni el artículo 10º del Anexo I ni el Anexo III en su totalidad.

Sr. Presidente. Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. Señor presidente: el bloque Federal no acompaña el Anexo II ni el Anexo III.

Sr. Pichetto. Propongo que primero se vote en general y luego en particular. Las observaciones en particular ya quedaron registrada en la versión taquigráfica.

Sr. Presidente. Entonces, vamos a hacer dos votaciones.

En primer término, se va a votar en general.

— *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Prosecretario (Canals). Se registran 60 votos por la afirmativa. Unanimidad.

— *El resultado de la votación surge del Acta N° 2*

Sr. Presidente. Aprobado.

Pasamos a la votación en particular.

Para una aclaración tiene la palabra el señor senador Martínez, por Tierra del Fuego

Sr. Martínez (José Carlos). Señor presidente: dado que hay muchas observaciones, puede darse el caso de que algún artículo en particular no tenga los votos necesarios. No veo cómo salvar esa situación.

Sr. Pichetto. Tenemos los votos necesarios. Que los senadores que han hecho las observaciones no voten afirmativamente. Reitero; tenemos la mayoría para aprobar el proyecto en una sola votación.

Los códigos cuando se votan no se abren. Es la experiencia histórica en el Congreso. Si vamos a votar artículo por artículo, estaríamos frente a un hecho excepcionalísimo. De esa forma se puede perder lo que caracteriza a un código, que es la coherencia y la sistematización.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. Señor presidente: nos van a obligar a votar en particular en contra de todos los artículos. No tiene sentido porque no queremos votar en contra de todo. ¿Por qué no se busca un esquema de votación rápida de los artículos....

Sr. Pichetto. Quedó registrado en la versión taquigráfica que ustedes votarían lo que han ratificado, con la exclusión de los artículos respecto de los cuales dijeron que no estaban de acuerdo. Por lo tanto, lo que corresponde es que presionen el botón verde. La negativa ya fue expresada verbalmente y quedó asentada en la versión taquigráfica.

Sr. Presidente. Se va a votar en particular, con las observaciones que han hecho los senadores...

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. Son dos artículos nomás en los que hay observaciones, que son los que se refieren a dos anexos. Respecto de lo demás votaremos positivamente.

Sr. Presidente. Las observaciones parciales son a los artículos 2º; 3º; 4º y 5º. El proyecto tiene once artículos. Podríamos votar primero los artículos que no tienen observaciones y luego los que acabo de mencionar.

Entonces, pasamos a votar los artículos 1º; 6º; 7º; 8º; 9º y 10º. El 11 es de forma. Y luego votamos los demás.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Prosecretario (Canals). Se registran 60 votos afirmativos. Unanimidad.

— *El resultado de la votación surge del Acta N° 3¹²*

Sr. Presidente. Queda aprobado.

En consideración el artículo 2º.

Este artículo hace referencia al Anexo I. Había una observación al artículo 10 de dicho Anexo. Hay que votar el artículo, no se puede ir al Anexo.

Sr. Giustiniani. Hay un solo artículo del Anexo que se vota por la negativa.

¹² Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. Pero hay que votar todos los artículos, salvo este.
La norma se refiere al Anexo.

— *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Presidente. Se va a votar el artículo 2°...

Sr. Petcoff Naidenoff. Pido la palabra.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. Señor presidente: quiero aclarar algunas cosas.

Ya hemos expresado que acompañamos las modificaciones al Código Procesal Penal y la incorporación de tipos penales de delitos cometidos por los militares, con excepción del artículo 10 del Anexo I.

Si nos vemos obligados a acompañar el artículo 2° estaríamos aprobando modificaciones del Código que no avalamos.

Murmullos en el recinto.

Sr. Petcoff Naidenoff. No; no es voto en contra.

Nosotros objetamos y no acompañamos un solo artículo del Anexo I. No podemos votar en contra de todo.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. Señor presidente: la verdad es que hay una distorsión ya que cada bloque había expresado claramente en qué no estaba de acuerdo o cuál era su disidencia. Y quedaba consignado que no votaban favorablemente ese aspecto; el resto sí. De esa manera, todo quedaba resuelto en una sola votación.

Pero ahora se ha incorporado un conflicto que, indudablemente, traba la votación.

Sr. Presidente. Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. Señor presidente: votamos a favor el artículo 2° y queda hecha la salvedad de que se vota negativamente el artículo 10 del Anexo I.

Así vota el bloque de la Unión Cívica Radical y el resto de los que se han expresado en ese sentido.

Todos los que sean radicales. *(Risas.)*

Sr. Presidente. Se va a votar el artículo 2°, teniendo en cuenta la observación hecha por el señor senador Petcoff Naidenoff.

— *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Presidente. Se está votando el artículo 2°.

— *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Sanz. Es más fácil cuando usted desempata, señor presidente. *(Risas.)*

Sr. Presidente. Senadores Martínez y Díaz, por favor manifiesten su voto a viva voz.

— *Luego de unos instantes:*

Sr. Presidente. Vamos a ordenar de nuevo la votación.

Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. Señor presidente: el problema es que nosotros habíamos votado antes, cuando estaba armándose la discusión; pero después el criterio que propuso el senador Morales y que todos acordamos, es que votábamos favorablemente en general, acordando que el artículo 10 era el único que votábamos en contra. El problema es que quedaron trabados dos votos. Este es el único problema. O sea que esta votación es por unanimidad, a favor, con el voto en contra del artículo 10 del anexo...

Sr. Presidente. Eso ya consta en el acta.

*El resultado de la votación surge del Acta N° 4*¹³

Sr. Presidente. Entonces, queda aprobado el artículo 2°, por unanimidad, con las observaciones realizadas.

Corresponde considerar el artículo 3°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). Se registran 51 votos por la afirmativa y 9 por la negativa.

¹³ Ver el Apéndice

El resultado de la votación surge del Acta N° 5 ¹⁴

Sr. Presidente. Queda aprobado el artículo 3°.

Corresponde considerar el artículo 4°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). Se registran 40 votos por la afirmativa y 19 por la negativa.

El resultado de la votación surge del Acta N° 6 ¹⁵

Sr. Presidente. Señor senador Salazar: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sr. Salazar. Negativo.

Sr. Presidente. Queda aprobado el artículo 4°.

En consideración el artículo 5°.

Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. Señor presidente: vale lo mismo aquí, que respecto al artículo 2°: Nosotros votaríamos a favor, aclarando que la senadora Díaz, el senador Martínez, la senadora Estenssoro y quien habla no vamos a acompañar los artículos 12 y 13 del Capítulo III y el inciso 5) del artículo 28 del Capítulo V. O sea, que votamos en general ahora todos...

Sr. Presidente. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5°

Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). Se registran 60 votos por la afirmativa, unanimidad.

El resultado de la votación surge del Acta N° 7 ¹⁶

Sr. Presidente. Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.



Senado de la Nación

Votación Nominal

126º Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

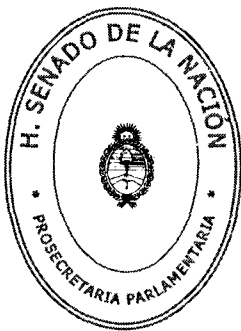
ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-94/67 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

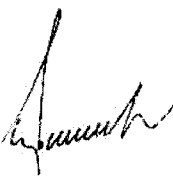
VOTACIÓN EN GENERAL

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°:2	Fecha: 6 - 08 - 68	Hora: 19:47
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: COBOS, Julio C. C.	Votaciones: NO	

Presentes Identificados:	66	Votos afirmativos:	60
Presentes No Identificados:	-	Votos negativos:	-
Total Presentes:	66	Votos nulos:	-
Ausentes:	6		
Votos Afirmativos Necesarios:	31	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA




JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

Senado de la Nación

Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 10ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-94/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

VOTACIÓN EN GENERAL

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°:2

Fecha: 6 - 08 -08

Hora:19:47

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AFIRMATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AFIRMATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO



Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 10° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487.Y ANEXO
(CD-94/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

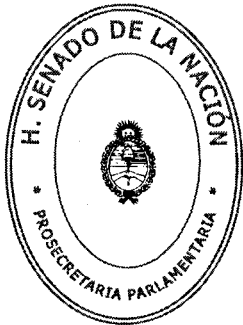
VOTACIÓN EN PARTICULAR

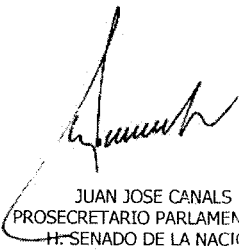
Artículo 1º, y 6º a 10º

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°:3	Fecha: 6 - 08 -08	Hora:19:51
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: COBOS, Julio C. C.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	60	Votos afirmativos:	60
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	60	Abstenciones:	-
Ausentes:	12		
Votos Afirmativos Necesarios:	31	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA




JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION



Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 10° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 187 Y ANEXO
(CD-54/87 Y CD-44/76 RE DE ERRATAS)

VOTACIÓN EN PARTICULAR

Artículo 1º, y 6º a 10º

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta Nº:3

Fecha: 6 - 03 - 08

Hora: 19:51

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C. C.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	NEGRE DE MONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AFIRMATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Marici María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TRCADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AFIRMATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO	VIJES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-94/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°: 4

Fecha: 6-08-08

Hora: 19:55

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

COBOS, Julio C.

Desempate: NO

Presentes Identificados:	59
Presentes No Identificados:	-
Total Presentes:	59
Ausentes:	13
Votos Afirmativos Necesarios:	30

Votos afirmativos:	57
Votos Negativos:	2
Abstenciones:	-

RESULTADO de la VOTACIÓN **AFIRMATIVA**

Informe de auditoria de modificaciones

	Versión Original	Actual
PINCHETTI DE SIERRA, M.Delia	AUSENTE	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	AFIRMATIVO

Observaciones:

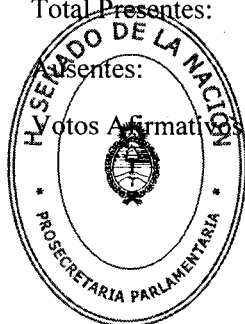
La Senadora Pinchetti se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo. La senadora Estenssoro y el senador Giustiniani manifiestan un error en la emisión de su voto y solicitan dejar constancia de su voto afirmativo, haciendo la salvedad que sólo votan en forma negativa el artículo 10° del anexo I. En el mismo sentido manifiestan su voto negativo en el artículo 10° del anexo I las senadoras Colombo y Díaz; y los senadores Castillo, Marino, Martínez A., Massoni, Morales, Petcoff Naidenoff, Sanz, Vera, y Martínez J. C..

Modificaciones realizadas el 6 / 08 / 08

Presentes Identificados:	59
Presentes No Identificados:	1
Total Presentes:	60
Ausentes:	12
Votos Afirmativos Necesarios:	31

Votos afirmativos:	60
Votos Negativos:	
Abstenciones:	-

RESULTADO de la VOTACIÓN **AFIRMATIVA**



JUAN JOSE CANALES
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION



Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 10° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-94/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 2º

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°: 4

Fecha: 6-08-08

Hora: 19:55

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AFIRMATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	LEV.VOT
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AFIRMATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO



Senado de la Nación

Votación Nominal

126° Periodo Legislativo - Ordinario - 10° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-94/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 39

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°: 5

Fecha: 6-8-05

Hora: 19:58

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.

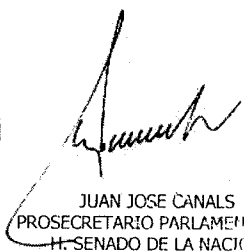
Destruye: NO

Presentes Identificados:	60
Presentes No Identificados:	-
Total Presentes:	60
Ausentes:	12
Votos Afirmativos Necesarios:	31

Votos afirmativos:	51
Votos Negativos:	9
Abstenciones:	-

RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA
---------------------------------	-------------------




JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION



Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 10° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-94/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 3º

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta Nº: 5

Fecha: 6-8-08

Hora: 19:58

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AFIRMATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	NEGATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AFIRMATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	NEGATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO



Senado de la Nación

Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 10° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-91/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 4°

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°: 6 Fecha: 6-8-08 Hora: 19:58
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: COBOS, Julio C. Desempeño: NO

Presentes Identificados:	59	Votos afirmativos:	40
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	19
Total Presentes:	59	Abstenciones:	-
Ausentes:	13		
Votos Afirmativos Necesarios:	30	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

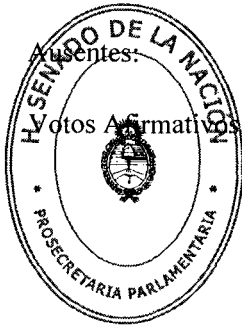
	Versión Original	Actual
SALAZAR, Carlos E	AUSENTE	NEGATIVO

Observaciones:

El Senador Salazar se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto negativo.

Modificaciones realizadas el 6 / 08 / 08

Presentes Identificados:	59	Votos afirmativos:	40
Presentes No Identificados:	1	Votos Negativos:	20
Total Presentes:	60	Abstenciones:	-
Ausentes:	12		
Votos Afirmativos Necesarios:	31	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA



JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION



Votación Nominal

126° Periodo Legislativo - Ordinario - 10° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-94/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 4º

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°: 6

Fecha: 6-8-08

Hora: 19:58

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	MAYANIS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liriana Teresita	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	NEGATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	NEGATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
CORRADI de BELTRAN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	NEGATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	LEV.VOT.
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	NEGATIVO
MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO	VERANI, Pablo	NEGATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	NEGATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	NEGATIVO	VUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO



Senado de la Nación

Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 10° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-94/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 5º

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°:7	Fecha: 6-8-08	Hora:20:00
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: COBOS, Julio C.	Desempate: NO	

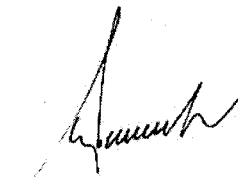
Presentes Identificados:	60	Votos afirmativos:	60
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	60	Abstenciones:	-
Ausentes:	12		
Votos Afirmativos Necesarios:	31	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Observaciones:

Las Senadoras Díaz y Estenssoro y los senadores Giustiniani y Martínez J. solicitan dejar constancia de su voto negativo en los artículos 12º, 13º; y en el inciso 5 del artículo 28º del Anexo IV.

Modificaciones realizadas el 6 / 08 / 08




JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION



Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 10° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

ORDEN DEL DÍA 487 Y ANEXO
(CD-34/07 Y CD-44/08 FE DE ERRATAS)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 5°

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°:7

Fecha: 6-8-08

Hora:20:00

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AFIRMATIVO	PÁMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AFIRMATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO